

HEMEROTECA
C I N E P

MOVIMIENTOS SOCIALES







LAS LUCHAS SOCIALES DEL POST-FRENTE NACIONAL (1975-1990)*

POR: MAURICIO ARCHILA NEIRA**

"Si los paros (cívicos) son el nuevo escenario de la política buscado por el gobierno, hay que fomentarlos. Esta apertura democrática no debe desaprovecharse. Además dada la quietud gubernamental, parece que ésta será la única forma de hacerse oír..."

"...Nosotros no hemos propuesto que se cambiara el tradicional escenario de la política por los paros cívicos. Hemos registrado, sí, que ello ha sucedido."

(Apartes de dos editoriales escritos por Alvaro Gómez en El Siglo, el 8 y el 12 de junio de 1987)

* Último avance de la investigación sobre la Acción Social Colectiva, 1975-1990, del plan trienal de Cinep que culminó en 1999. El autor agradece la lectura de prensa para los años 1975-1980 realizada por Juánita Castellanos y Lida M. Núñez. También recoge los aportes críticos de los integrantes del seminario sobre Movimientos Sociales. Sin la eficaz colaboración de Martha C. García en la elaboración de las bases de datos y gráficos, además de las pertinentes sugerencias de contenido, este avance no hubiera llegado a ser lo que es. De nuevo debo agregar que si los logros son compartidos, los errores son de mi entera responsabilidad.

** Investigador del CINEP y Profesor de la Universidad Nacional.



on estas sorprendentes frases, Alvaro Gómez no sólo buscaba 'pescar en río revuelto' como adujo la gran prensa en respuesta, sino que tocaba un problema central de estos años posteriores al Frente Nacional: la creciente ilegitimidad del sistema político tradicional fruto, entre otros factores, de la irrupción dispersa de múltiples actores sociales que estaban por fuera de dicho sistema. No se sabía qué era peor si las enfermedades sociales o las medicinas políticas para curarlas. A una enemistad partidista le sucedió un divorcio creciente entre el Estado y el grueso de la sociedad. La sombra de la ilegitimidad campeaba ya no sólo en las tribunas políticas sino en las más apartadas regiones y en los más disímiles escenarios.

En realidad el pacto bipartidista que rigió al país entre 1958 y 1974 tuvo indudables logros al apagar los odios partidistas, poner a los militares bajo el control civil y propiciar un desarrollo económico más o menos constante, en medio de una creciente modernización que se manifestó desde los años de la posguerra.¹ Estos logros, sin embargo, se vieron oscurecidos por la exclusión política de grupos al margen del bipartidismo, la pérdida de identidades partidistas, la autonomización de los militares, la desatención a los actores sociales y el consiguiente aumento de la brecha social. Todo ello condujo a una despolitización generalizada y a una debilidad del sistema político que siguió recurriendo al clientelismo como forma de relación con los electores. El Estado creció tanto en burocracia como en capacidad interventora pero en favor de las minorías poderosas, lo que disminuyó su capacidad de acción autónoma y lo hizo botín de caza de las elites políticas y económicas que lo usufructuaban a su favor. La precaria sociedad civil fue dejada a su suerte sin mediaciones políticas ante el Estado, lo que explica su dispersa radicalización que semeja no una situación revolucionaria pero sí una creciente enemistad social que a su vez redundó en mayor desinstitucionalización y ruptura del tejido social.

La resultante fue un alejamiento entre representantes y representados, entre sistema político y actores sociales, entre las esferas política y social, con lo que cada una quedó autorreferida y sin vasos comunicantes mutuos. En esas condiciones hizo irrupción la guerrilla revolucionaria que pretendió legitimarse en esa enemistad social y en una cierta desatención estatal de los sectores populares, especialmente del campo. Si la hoguera del choque bipartidista quedaba atrás, una nueva forma de enfrentamiento violento entre los colombianos cobraba fuerza, ahora como supuesta guerra de clases.² Tanto la acción armada como la respuesta estatal cerraron aún más los espacios de negociación política y debilitaron la constitución de actores sociales.³ En consecuencia, al final del Frente Nacional aunque la guerrilla entró en temporal reflujo, el panorama era crítico pues el Estado se había deslegitimado, los partidos políticos no mediaban y los movimientos sociales estaban radicalizados pero eran débiles en términos organizativos. Así se cocinaba una nueva crisis política que surgió, en forma paradójica, como resultado del intento de superar otra.

Lo que sucedió luego es el objeto de estas páginas. Alfonso López Michelsen subió en 1974 en condiciones ideales para reencauzar la situación crítica del país pues contó con caudaloso apoyo electoral, lo que reflejaba expectativas populares en favor suyo y de su partido; la violencia guerrillera estaba bastante controlada y, aunque rápidamente apareció la recesión económica, una súbita alza de precios del café trajo una bonanza que auguraba un equilibrio económico. Pero López fue más un presidente heredero del Frente Nacional que de la disidencia creada años antes por él, el MRL. Pronto la gente se daría cuenta de esta realidad y se agudizarían los conflictos, hasta culminar con el Paro Cívico de septiembre de 1977. La represión a la protesta y la creciente autonomización de los militares en el manejo del orden público insinuaban los rasgos de una respuesta diferente a la crisis que se hizo evidente en el siguiente período presidencial, el de Julio César Turbay (1978-1982). Pero el movimiento guerrillero que se pretendió sofocar a sangre y fue-

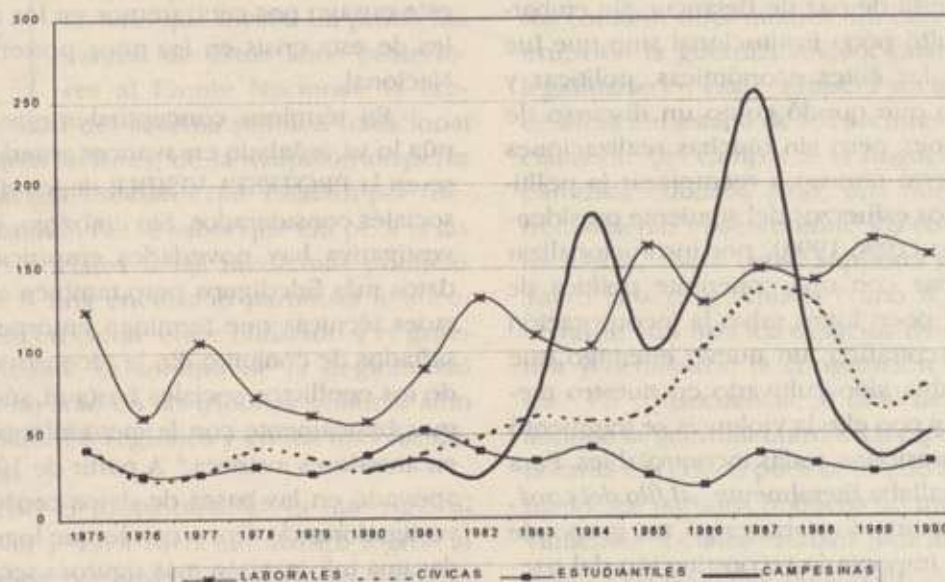
go, creció en forma inusitada. La alternativa represiva marcó el gobierno de Turbay aunque al final abrió las compuertas de un diálogo que continuaría el siguiente gobernante, Belisario Betancur (1982-1986). La propuesta de paz de Betancur, sin embargo, no sólo resultó poco institucional sino que fue torpedeada por las élites económicas, políticas y militares, con lo que quedó como un discurso de buenas intenciones pero sin muchas realizaciones prácticas. La guerra retornó a reemplazar la política.⁴ A pesar de los esfuerzos del siguiente presidente, Virgilio Barco (1986-1990), por institucionalizar el proceso de paz con una coherente política de inversión social, poco logró salvo la incorporación del M-19. El narcotráfico, un nuevo enemigo que larvadamente había sido cultivado en nuestro medio se desbordó y con ello la violencia se fragmentó en múltiples expresiones, todas incontrolables. Para 1990 el país se hallaba literalmente 'al filo del caos', como oportunamente lo caracterizó un grupo de académicos.⁵ Se imponía la reconstitución del pacto social como se propuso hacerlo la Asamblea

Constituyente convocada ese año. Los resultados, sin embargo, no fueron los esperados y todavía hoy, a comienzos de un nuevo siglo, el país sigue más cerca del caos que de la estabilidad añorada. En este ensayo nos centraremos en los aspectos sociales de esta crisis en los años posteriores al Frente Nacional.

En términos conceptuales este ensayo continúa lo ya señalado en avances anteriores al centrarse en la PROTESTA VISIBLE de los diversos actores sociales considerados. Sin embargo, en esta fase investigativa hay novedades empíricas que arrojan datos más fidedignos pero también algunas dificultades técnicas que terminan entorpeciendo los resultados de conjunto. En la reconstrucción histórica de los conflictos sociales hasta el año 80 continuamos básicamente con la metodología que traíamos en anteriores avances.⁶ A partir de 1981 nos hemos apoyado en las bases de datos construidas por investigadores de Cinep con lo que logramos consolidar una información más rigurosa sobre la trayectoria de los conflictos laboral, rural y cívico.⁷ Por nues-

- 1 El balance de dicho período lo establecimos en anteriores escritos, en especial "Protesta social y Estado en el Frente Nacional", *Controversia*, No. 170, mayo de 1997, págs. 9-55. Las pautas metodológicas seguidas en este ensayo fueron esbozadas también en ese artículo.
- 2 Así lo señaló con claridad el presidente López Michelsen: "Hoy tenemos la lucha de clases más que la lucha de partidos... Entonces, el tema de cómo hacer la paz entre liberales y conservadores no tiene ya actualidad, sino cómo ventilar el debate entre los amigos del statu-quo y quienes aspiran a un orden distinto." (Entrevista a la *Revista Causa Común*, No. 1, abril-mayo de 1977, pág. 19, citada por Jonathan Hartlyn, *La política del régimen de coalición*. Bogotá: Tercer Mundo, 1993, pág. 251).
- 3 Alain Touraine, en reciente conferencia sobre la democratización en América Latina, señala que "la destrucción o el debilitamiento de las mediaciones políticas institucionales entre demandas sociales y decisiones estatales, resultaba en la incapacidad real de muchos países de autorregular su sistema político" ("Éxitos y límites de la democratización en América Latina", *IASA Forum*, Vol. XXVIII, No. 2, verano de 1997, pág. 18).
- 4 En esta parte sigo la lectura de Gonzalo Sánchez en "Guerra y política en la sociedad colombiana" *Análisis Político*, No. 11, septiembre-diciembre de 1990, págs. 7-27.
- 5 El texto con el mismo nombre fue compilado por Francisco Leal y León Zamose y fue publicado por Tercer Mundo (Bogotá) en 1990.
- 6 La metodología básica es la lectura de un periódico nacional (*El Tiempo* o en su defecto *El Espectador*) y del mayor número posible de órganos de prensa sobre movimientos sociales. Así por ejemplo, para este período se revisó *Alternativa* (1974-80), *Alternativa del Pueblo* (1975-76), *Colombia Hoy* (1979-1990), *Cien Días* (1987-1990), *Opción* (1987-1990) y *Unidad Indígena* (números sueltos). Así mismo se tuvo acceso a documentos de primera mano que reposan en el Archivo de Luchas Campesinas de Cinep. Aunque en anteriores fases de la investigación incluíamos la amenaza de paro, especialmente para las acciones cívicas, decidimos suprimirla pues no tiene la misma 'calidad' de protesta que un paro o una movilización. En esta ocasión hemos tratado de seguir un actor descuidado por extrañas razones: los presos. Así sus luchas sean poco numerosas, hacen parte de los problemas sociales del país.
- 7 Aunque comparto los criterios básicos de los investigadores que construyen esas bases de datos (Alvaro Delgado, Esmeralda Prada y Martha Cecilia García), hay diferencias que están en proceso de discusión para ofrecer hacia el futuro información compatible o al menos comparable. En todo caso para los sectores mencionados asumo en este ensayo los resultados que ellos ofrecen con pequeñas modificaciones. Por ejemplo en las luchas rurales incluyo los datos que se ofrecen sobre invasiones, y excluyo amenazas de paro, peticiones y éxodos. Para los sectores cívicos adiciono los datos que encontré sobre invasiones y protestas violentas mas no armadas que son harina de otro costal como lo he señalado en ocasiones anteriores. Separo también las acciones de sectores empresariales o de trabajadores independientes. Por último, con relación al sector laboral, que cuenta con la base de datos más consolidada en términos históricos, no adiciono formas de lucha distintas de la huelga pues los datos encontrados fueron poco confiables. Por tanto en este sector se sigue solamente el recuento de huelgas construido por Alvaro Delgado.

Gráfico 1
LUCHAS SOCIALES
1975-1990



tra cuenta reconstruimos la dinámica de la lucha estudiantil de esos años consultando el Archivo de Prensa de la misma institución. Pero si conseguimos más cobertura en fuentes —dicho Archivo hace el seguimiento de diez periódicos nacionales y regionales—,⁸ por el sistema de clasificación de la noticia se nos invisibilizaron actores que no están explícitamente agrupados en los códigos consultados. Nos referimos a las demandas de sectores empresariales o de trabajadores independientes y, sobre todo, a las de las mujeres. A ello se suma la tendencia común por parte de muchos investigadores de ver las luchas indígenas desde una perspectiva de clase, y por tanto no reconocerles la especificidad étnica en sus resultados públicos. Son dificultades que no son insalvables y en el futuro esperamos remediarlas.⁹

Sin más preámbulos entremos en materia. El ensayo se divide en cuatro partes: en la primera hacemos un somero recuento de las trayectorias anuales de las luchas sociales; en la segunda reto-

mamos la conflictividad de los sectores sociales según su visibilidad pública; en la tercera tocamos el problema de la regionalización de la protesta social; y por último extraemos algunas hipótesis de conjunto a modo de conclusiones.



UNA MIRADA DIACRÓNICA DE LAS LUCHAS SOCIALES

El cuadro 1 y el gráfico que lo acompaña resumen la información confiable que hemos encontrado sobre luchas sociales en los años estudiados. A pesar de los problemas metodológicos anotados con anterioridad, se perciben algunas tendencias cíclicas claras al menos en los movimientos sociales más visibles —laboral, campesino, cívico y estudiantil—. A *grosso modo* se puede decir que entre 1975 y 1982

CUADRO 1
LUCHAS SOCIALES
1975-1990

AÑO	Laboral Huelgas	Cívicos	Estudiantes	Campesinos	Indígenas	Gremios	Mujeres	Presos
1975	125	43	42		2	13	1	3
1976	61	24	26		1	6	1	1
1977	106	27	27		1	9	2	1
1978	73	42	31		2	9		2
1979	62	36	27		2	8	2	1
1980	58	28	38	29	3	6	3	
1981	90	39	53	35		3		
1982	132	48	40	25	1	1		
1983	110	61	34	72	2			
1984	103	58	42	182	1	1		
1985	163	64	25	101	1	1		
1986	129	102	19	154	3	2		
1987	149	136	38	254	3	1		
1988	142	127	32	87	1	1		
1989	167	67	27	37	4			
1990	157	80	33	50	2			1

FUENTE: Revisión de prensa por el autor y bases de datos de luchas sociales de Cinep

hay una fase de descenso en las protestas sociales registradas en la prensa, con algunos picos parciales en 1977 (para el sector laboral), 1978 (para el cívico) y 1981 (para el estudiantil). A partir de 1982 se reactiva la lucha social en el país llegando a su tope en 1987 (especialmente en los campesinos y el sector cívico) para iniciar de nuevo un notorio descenso. El que la fase de descenso coincida con el endurecimiento del gobierno lopista y sobre todo con el mandato de Turbay Ayala, y que la fase de auge se presente en momentos de reformismo

como el de Betancur y de desmonte formal del Frente Nacional con Barco, sugiere la importancia de la variable política —promesa o apertura democrática— para explicar la movilización social.¹⁰ Veamos con mayor detalle lo ocurrido en esos años para ilustrar mejor esta impresión.

El gobierno de Alfonso López había abierto expectativas reformistas lo que en parte se reflejó en el alto indicador de luchas que ya constatábamos en 1974 y que en términos generales se mantiene sobre todo en el sector laboral hasta el 77.¹¹ De

8 *El Tiempo, El Espectador, La República, El Siglo, Voz (Proletaria), El Colombiano, El Mundo, El País, El Heraldo y Vanguardia Liberal.*

9 La información existe, pero aún no hemos llegado al código que nos permita el acceso a ella.

10 Esta hipótesis que ya la había sugerido para periodos anteriores como la Violencia y el Frente Nacional (véanse el ensayo ya citado "Protesta social y Estado en el Frente Nacional" y "Protestas sociales en Colombia, 1946-1958", *Historia Crítica*, No. 11, julio-diciembre de 1995, págs. 63-77), será desarrollada más adelante.

11 En realidad 1974 fue el segundo en cifras agregadas en todo el periodo que estudiábamos en anterior avance, el del Frente Nacional ("Protesta social y Estado...", pág. 22).

esa época datan importantes huelgas como las de Riopaila (noviembre del 75 a febrero del 76), Vanitex (febrero-abril, 1976), bancarios (febrero-junio, 1976), médicos del ICSS (septiembre-octubre, 1976), magisterio (varios conflictos en 1976 y 1977), cementeros (julio-septiembre, 1977), petroleros (agosto-octubre, 1977), e Indupalma (agosto-septiembre del mismo año) para no hablar del paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. Aunque los otros sectores sociales estuvieron activos en esos años, en especial el sector empresarial en términos relativos a su evolución, disminuyen los registros de prensa sobre luchas estudiantiles y cívicas con repentes temporales.

El relativo protagonismo laboral tuvo que ver con el choque entre las consecuencias inflacionarias de la política aperturista en economía, el manejo de la bonanza cafetera en favor de los intereses del poderoso gremio del ramo y los planes de reforma laboral.¹² En medio de aspectos vistos como positivos por los dirigentes obreros tales como la protección sindical, el impulso a la organización de industria y la unificación de la legislación en el campo y la ciudad, la propuesta de López buscaba imponer el salario integral, la lógica de aumentos según productividad, la extensión de la categoría 'servicio público' y el mayor uso de los Tribunales de Arbitramento para limitar la huelga. Hasta aquí todo parece indicar un típico conflicto laboral por mejores condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, el arrogante estilo político del gobierno tuvo también su responsabilidad en la agitación social. La efímera presencia de María Helena de Grovo como ministra de Trabajo y la concesión de las personerías jurídicas a la CSTC y la CGT, lejos de disminuir la tensión con la

dirigencia sindical, la incrementó hasta desembocar en el mencionado paro cívico. Por primera vez se logró la unificación de las confederaciones tradicionales UTC y CTC con las orientadas por la izquierda, CSTC y CGT y parte del sindicalismo no confederado.

La mirada desproporcionada del significado del paro cívico del 77, en una coyuntura internacional de renacimiento de los proyectos insurreccionales en especial en Centroamérica, da un segundo aire a la guerrilla colombiana que se involucra en las luchas sociales y en muchos casos las suplanta. En particular fue muy contraproducente el injustificable asesinato del exministro de gobierno Pardo Buelvas en su residencia por parte de un comando de la Auto-defensa Obrera (ADO). Mejor disculpa no podían encontrar los organismos de seguridad del Estado para intentar controlar el aparente desborde popular. La creciente autonomización de las fuerzas armadas se ratifica con creces con la expedición del Estatuto de Seguridad a un mes de posesionado Julio César Turbay. Mientras tanto aumentan las denuncias contra los consejos verbales de guerra, la violación de los derechos humanos y las primeras desapariciones en términos políticos. Si la izquierda

percibió con triunfalismo el Paro Cívico, del otro lado del espectro político se hizo una lectura igualmente exagerada del evento como lo reflejan la expedición del Estatuto de Seguridad y la mayor presión de los mandos militares.¹³

Turbay, al contrario de su predecesor, logró la presidencia con el escaso margen de 3% de los votos sobre su contrincante, Belisario Betancur. Pero rápidamente remontó esta diferencia construyendo un sólido respaldo en el Congreso por medio de la repartición milimétrica de los cargos públicos. El Estatuto de Seguridad, por su parte, creó



nuevas infracciones punibles, aumentó las penas, otorgó más atribuciones judiciales a las fuerzas armadas y a las autoridades locales, permitió la retención de ciudadanos con aprobación del consejo de ministros y anunció control del tráfico de estupefacientes. Con este respaldo las Fuerzas Armadas se dedicaron a perseguir a la guerrilla, a activistas de la izquierda legal y a dirigentes populares como si todos fueran un mismo enemigo. El uso generalizado de la tortura y otras violaciones de derechos humanos degradaron esa guerra y elevaron clamores de protesta aún entre miembros del alto clero y de la élite.

Hacia el año 80 se manifiesta de nuevo un ciclo recesivo acompañado del descenso en los precios del café, éste sí de proporciones devastadoras para la industria. Turbay, en aras de ganarse el apoyo de la clase política, rompe con la austeridad fiscal. Ante la ausencia de fondos propios recurre al crédito externo para financiar megaproyectos. Todo ello redundó en un desborde inflacionario que oscila cerca del 30% entre 1979 y 1981, a pesar de las medidas de contracción monetaria que adopta el gobierno.¹⁴ Mientras las actividades productivas entraban en recesión, el mundo financiero respiraba abundancia pero con manejos no del todo claros. Al abrigo de la actividad especulativa se fortalece la economía clandestina a pesar de la retórica en su contra y del tratado de

extradición con Estados Unidos. En síntesis, continúa la dinámica neoliberal iniciada con el gobierno de Pastrana, en desmedro del crecimiento productivo y de las políticas sociales.

La combinación de apertura neoliberal, en momentos de recesión industrial, y altas dosis de represión puede explicar la disminución en los indicadores de protesta social en los sectores más visibles. La agitación laboral, aunque en menor escala, no desaparece especialmente en el sector público. La dramática huelga de los trabajadores del Ministerio de Hacienda entre agosto y diciembre de 1979, con estertores hasta bien entrado 1980, es un buen reflejo de lo que ocurría en el sindicalismo en esos años. Lo que en un principio era un conflicto más o menos común en el sector oficial terminó radicalizando a las partes. Orientado por la izquierda, el sindicato se lanzó a una huelga que fue cada vez más aislada. Aunque se levantó formalmente a fines de 1979, continuaron los sabotajes, bloqueos de instalaciones, tomas de entidades públicas e iglesias, marchas y hasta amenazas de sacar una cartilla de evasión fiscal para concluir con una pírrica participación en las elecciones parlamentarias con lista propia.¹⁵ El Ministerio de Hacienda, por su parte, se negó a cualquier tipo de negociación y más bien acudió a los instrumentos de represión que otorgaba el Estatuto de Seguridad. El aislamiento y la des-

12. Para Leopoldo Münera hay una rotación en el protagonismo de los movimientos llamados por él populares. Si a fines de los sesenta y principios de los setenta recayó en el movimiento campesino, en los años 1974-1978 fue el turno del sindicalismo, para luego repuntar el movimiento cívico. En el mandato de López, dice el autor, ante el declive del movimiento guerrillero y de las luchas campesinas, "el movimiento sindical constituyó el eje de la praxis política de izquierda" (*Rupturas y continuidades: poder y movimiento popular en Colombia, 1968-1988*. Bogotá: Cerec-IEPRI-Facultad de Derecho, Universidad Nacional, 1998, pág. 334).

13. Aunque éste no es el espacio para hacer un balance de la jornada hasta anotar que además de la fugaz unidad sindical en la que colaboró gran parte de la izquierda, hubo un sector del Partido Conservador —el ospino-pastranismo— que se sumó a ella. Esto significa que no fue tan popular como se la ha querido ver. En términos de lectura del evento lo más grave fue la mirada común a la derecha y a la izquierda como si fuera la antesala de una insurrección cuando se trató de una mera protesta social. Un ejemplo desde la izquierda es la interpretación del evento que dieron Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas en *Luchas obreras y política laboral en Colombia* (Bogotá: La carreta, 1978, pág. 317). Para la lectura desde el establecimiento político bastaría revisar las innumerables declaraciones del mismo Alfonso López y de los mandos militares de la época. Una mirada crítica de ambas posturas en Medófilo Medina, "Dos décadas de crisis política en Colombia, 1977-1997" en Luz Gabriela Arango (Compiladora), *La crisis socio-política colombiana: un análisis no coyuntural de la coyuntura*. Bogotá: CES-Fundación Social, 1997, págs. 29-30.

14. Datos tomados de Francisco Leal, "Estabilidad macroeconómica e institucionalidad y violencia crónica" en el libro compilado por él, *En busca de la estabilidad perdida*. Bogotá: Tercer Mundo, 1995.

15. No deja de ser sorprendente la utilización de estas últimas herramientas de presión. Un dirigente sindical adujo que dicha cartilla "no se trata de nada ilegal. La evasión es un mal vicio que siempre ha coloneado al gobierno" (*Alternativa* No. 249, 1980, pág. 23). Mientras tanto la Contraloría investigó el manejo que hizo el sindicato del Fondo de Empleados, el cual fue temporalmente cerrado (*El Tiempo*, 30 de enero, 1980, pág. 1 y 7 de febrero, 1980, pág. 1).

esperación fueron las rasgos de un conflicto que en vano trató de enfrentar las políticas aperturistas y de control social del gobierno de Turbay.

La unidad del sindicalismo, en torno al Consejo Nacional Sindical (CNS), fue hábilmente quebrada en esos años por el acercamiento gubernamental a las centrales tradicionales, las cuales también se vieron abocadas a rupturas internas. En la práctica el CNS dejó de funcionar por lo que el segundo Paro Cívico Nacional del 21 de octubre de 1981 fue lanzado exclusivamente por los sectores sindicales influidos por la izquierda. En consecuencia su cobertura e impacto fueron menores que cuatro años antes, aunque sentó las bases de un proceso unitario que daría frutos un lustro después.

La acción de los sectores cívicos y campesinos también disminuyó durante la administración Turbay por efecto de las variables ya señaladas, especialmente la represión. Contrasta esta tendencia con la irrupción de formas de lucha más radicales distintas de las armadas como tales. A partir de 1979, por ejemplo, se nota un aumento de los bloqueos y las tomas de espacios públicos, especialmente de iglesias. Parecía que la mayor violencia estatal requería respuestas desesperadas que buscaban impactar la opinión pública. En esas condiciones es explicable que los estudiantes asumieran cierto protagonismo, especialmente en 1981, pues son más sensibles a los recortes democráticos y a la vez más osados para enfrentar las expresiones autoritarias.

El resurgimiento guerrillero, las denuncias de violaciones de derechos humanos y el aislamiento internacional, entre otras razones, obligaron al gobierno de Turbay a iniciar diálogos de paz, que de hecho empezaron en la negociación en torno a la toma de la Embajada Dominicana en 1980. La estrecha amnistía propuesta a finales de su gobierno no obtuvo ninguna aceptación. La enemistad entre los bandos enfrentados no disminuyó, e incluso nuevos actores violentos como los paramilitares entraron en escena, pero al menos quedó flotando en el ambiente la necesidad de una solución política al conflicto armado.

Esa fue la consigna con que se movió la campaña presidencial del 82 que ganó Belisario Betan-

cur. La estrategia belisarista de lanzar un movimiento suprapartidista en medio de la división liberal resultó benéfica para subir al poder, pero no le garantizó una mayoría parlamentaria. En el terreno económico Betancur buscaba el 'Crecimiento con Equidad', como tituló su plan de gobierno. Aplicó un tímido proteccionismo, debido más a la crisis industrial que a una ruptura definitiva con el modelo neoliberal, pues de todas formas le siguió apostando a la promoción de exportaciones, aplicando una gradual devaluación.¹⁶ Contrasta la recesión industrial con el crecimiento de sectores como el financiero y la construcción. La economía clandestina parecía encontrar allí salidas, que no eran evidentes a la opinión pública en ese momento. La actividad financiera, aunque boyante, sufrió la crisis de algunas instituciones bancarias por manejos dolosos. El gobierno nacionalizó las entidades cuestionadas, con lo que socializó las pérdidas. A fines del periodo de Betancur se superó la recesión pero quedó vigente el problema del desempleo.

Otro punto crítico fue la creciente deuda externa que continuó orientada a los megaproyectos para ampliar los servicios públicos, en particular energía y agua potable. En ese contexto se reaviva la movilización cívica en torno a esos servicios y en particular contra el deficiente manejo de las electrificadoras regionales. El gasto público entró de nuevo en austeridad por la recesión y la imposibilidad de adelantar una reforma tributaria que le fue negada a Betancur por el Congreso. La poca inversión que realizó se concentró en la rehabilitación de zonas conflictivas, pero enfatizando más en infraestructura que en gasto social como tal. Todo ello atentó contra la aplicación de una política reformista y redistributiva, lo que a su vez limitó la posibilidad de crear una amplia base de apoyo popular.

En el plano político sucedió otro tanto. Ante el modelo represivo de su antecesor, Betancur decidió repolitizar la guerra por medio del diálogo, con lo que buscaba legitimar el régimen. Con tal fin propuso una triple estrategia: negociar la paz; realizar una reforma política llamada apertura democrática; y retornar al concierto latinoamericano y mundial

con un discurso tercermundista.¹⁷ En forma satisfactoria sólo se logró el tercer propósito. El segundo fue frenado por la resistencia de gremios económicos y elites políticas, aunque se salvó de la debacle la elección popular de alcaldes y algunas medidas descentralizadoras. El resultado más dramático fue en torno al proceso de paz que se vislumbró en 1984 pero que rápidamente desapareció al año siguiente aunque formalmente siguió con las FARC hasta 1987.

Este clima de reformismo presidencial, en medio de recesión económica, explica el despertar de los movimientos sociales, en especial del cívico y campesino, desplazando al movimiento estudiantil en la presencia pública.¹⁸ Las expectativas de una transformación política vía la elección de alcaldes y la descentralización daba nuevo aliento a las demandas de las diversas comarcas y regiones en torno a servicios públicos, sociales e infraestructura. En el mundo laboral la lenta superación de la recesión con aumento del desempleo jalonó el incremento de las huelgas hacia final del período. Con este contexto y en medio de los avatares del proceso de paz, la izquierda lanzó el tercer Paro Cívico Nacional, convocado para el 20 de junio de 1985, con características similares al del 81. Mientras tanto el movimiento armado no sólo buscó insertarse en las renovadas protestas sociales, sino que realizó dudosas acciones de solidaridad que terminaban más bien atemorizando a los movilizados y se prestaban a respuestas represivas indiscriminadas por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Desde su campaña electoral Virgilio Barco se propuso la repolitización de la sociedad invocando las diferencias partidistas y estableciendo un gobierno de partido diferenciado de la oposición. El resul-

tado electoral pareció avalar esta postura pues obtuvo la mayor votación hasta el presente, aunque también no se excluye que en esos guarismos contó el temor al candidato conservador, Alvaro Gómez. El esquema de gobierno-oposición, aunque auguraba el desmonte definitivo del frentenacionalismo, no funcionó en la práctica porque el liberalismo no estaba unificado en torno al gobierno, el conservatismo no se constituyó como real oposición y la que se vislumbraba como verdadera, la Unión Patriótica (surgida de los acuerdos con las Farc), fue diezmada por la 'guerra sucia'. Barco terminó gobernando más con los tecnócratas que con su propio partido. El intento de institucionalizar los procesos de paz aplicando la fórmula de mano tendida y pulso firme, no tuvo logros inmediatos.

En el plano económico aumentó el gasto público en el desarrollo rural integrado y en la rehabilitación manteniendo el énfasis en obras de infraestructura. A ello le acompañó el programa de lucha contra la pobreza absoluta. De esta manera hizo real su propuesta de aumentar el gasto social manteniendo metas macro-económicas. El problema es que Barco centró la acción social en los municipios más conflictivos en términos de violencia, descuidando otros también necesitados pero sin esas dinámicas con lo que el mensaje podía ser leído en forma perversa como aliento a los actores violentos. A esta situación crítica se le agregaron el desborde de la inflación y el crecimiento de la deuda externa. Se amenazaba así la preciada estabilidad macroeconómica de la que hacía gala el país, a pesar de sus vaivenes políticos.¹⁹

Pero lo más grave del gobierno de Barco fue el aumento de la violencia y sobre todo su fragmentación. Aunque concretó la precaria reforma política

16 En cualquier caso, con Betancur el modelo mixto de desarrollo económico que caracteriza al país se inclinó en forma leve hacia el polo de la sustitución de importaciones (José A. Ocampo, "Reforma del Estado y desarrollo económico y social en Colombia", *Análisis Político*, No. 17, septiembre-diciembre de 1992, pág. 18).

17 Ricardo Santamaría y Gabriel Silva, *Proceso político en Colombia: del Frente Nacional a la apertura democrática*. Bogotá: Cerec, 1994, págs. 67-70.

18 Claro que con relación a los estudiantes hay elementos propios que explican su relativo descenso que veremos oportunamente en la siguiente sección.

19 Francisco Leal, "Estabilidad macroeconómica e institucional...".

lograda por el anterior gobierno, en especial la elección popular de alcaldes, no pudo contener el aniquilamiento de la UP. Sólo al final de su período con la negociación para la reinserción a la vida civil del M-19 y las bases para el posterior proceso con el EPL, PRT y Quintín Lame, se verán algunos frutos de su estrategia de paz, sin que la amenaza contra la vida de los excombatientes desapareciera. La proliferación de actores violentos, y la relación de algunos con organismos del Estado, hizo también difícil la lucha contra el narcotráfico ante la cual no hubo una clara postura sino hasta el asesinato de Luis Carlos Galán. En esa oportunidad el presidente Barco declaró en forma apresurada y sin mucha planeación una guerra frontal que costó muchas vidas y esfuerzos. Al asesinato de Galán siguió una oleada de terrorismo y de crímenes que segaron la vida de otros dos candidatos, esta vez de oposición, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.

Este choque entre expectativas reformistas y creciente violencia, en medio de la recuperación macroeconómica, es el contexto donde se produce el mayor número de acciones sociales colectivas del período estudiado. Hay un significativo auge de los movimientos más visibles, con excepción del estudiantil que sigue señalando un sensible descenso. Aunque el sindicalismo muestra aumentos significativos en términos de huelgas, llegando en 1989 al mayor pico del período estudiado, sin duda el protagonismo público corrió por cuenta de las acciones cívicas y campesinas. La unidad de la izquierda tanto armada como de sus frentes políticos, expresada incluso en la CUT —creada en 1986—, favoreció la inusitada movilización en las regiones en donde tenía presencia.²⁰ Las razones de este auge de las luchas sociales se estudiarán por separado para cada sector.

Contrasta la proliferación de luchas particulares con la precariedad de las movilizaciones de carácter nacional. Estas no se dieron a pesar de que las distintas instancias coordinadoras lo buscaron.²¹ En el segundo semestre de 1988, por ejemplo, la CUT realizó un plebiscito interno para determinar la convocatoria ya no de un paro cívico nacional, sino de una huelga general. Se pretendía trascender

los paros de transportes, en lo que habían derivado los eventos del 81 y 85, con una huelga de la producción. Aunque se votó afirmativamente y recibió el apoyo de organizaciones como los sectores críticos de la ANUC, la ONIC y la Coordinadora de Movimientos Cívicos, la jornada adelantada el 27 de octubre distó de paralizar la actividad productiva en las grandes ciudades.²²

A partir de 1988 se inicia un descenso en los registros de luchas sociales, con excepción del sindicalismo, que fue hábilmente utilizado por el gobierno para decir que estaba cumpliendo las promesas de ampliar la participación popular y de atender a los sectores marginados.²³ En realidad la relativa disminución de la acción social colectiva tenía que ver con factores más complejos como la misma represión, el recrudecimiento indiscriminado de la 'guerra sucia', las tensiones entre las organizaciones de izquierda que erosionaban las propuestas unitarias, las características mismas de anquilosamiento y burocratismo de muchas organizaciones reivindicativas y, por supuesto, cierto efecto ilusorio de la apertura democrática, aunque esta última obró en sentidos contradictorios. En agosto de 1988, por ejemplo, el recién electo alcalde de Anzoátegui, Tolima, convocó a un paro cívico —"una acción sin precedentes en la vida del país" como la catalogó *El Siglo*.²⁴ Las movilizaciones regionales de ese año y el siguiente ilustrarían que la descentralización no actuaba en sentido único: tanto podía aplacar la agitación social como incentivarla.

Lo definitivo para la acción social colectiva en este período fue el cruce con la dinámica política, especialmente con la búsqueda de una salida al conflicto armado y las propuestas que se barajaban de reconstitución del pacto societal. Hacia el final del mandato de Barco, en medio de la violencia fragmentada y desbordada, los actores sociales además de continuar con las denuncias sobre violación de derechos humanos e invocar el respeto a la vida, se involucraron en el debate sobre las salidas a la crisis y muchos decidieron participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Ellos no veían contra-

Cuadro 2
Paros cívicos y huelgas
1975-1990

AÑO	Paros Cívicos	Huelgas
1975	9	125
1976	11	61
1977	15	106
1978	26	73
1979	11	62
1980	9	58
1981	14	90
1982	25	132
1983	24	110
1984	21	103
1985	18	163
1986	38	129
1987	53	149
1988	35	142
1989	29	167
1990	27	157
Total	365	1827

FUENTES: Información procesada por el autor
y Bancos de Luchas Sociales de CINEP

dicción en apoyar el cambio constitucional y oponerse al modelo neoliberal pues esas eran las dos caras que ofrecía el recién inaugurado gobierno de César Gaviria.²⁵ Era su contribución a la construcción de un futuro mejor, lo que repolitiza la vida social. El resultado de esos esfuerzos, sin embargo, no fue el esperado, pero eso hace parte de otra historia que luego se abordará.



TENDENCIAS SECTORIALES

Como en avances anteriores de investigación a continuación hacemos una mirada, todavía descriptiva, de lo que ocurrió durante los años estudiados en cada uno de los sectores sociales con más visibilidad en el escenario público.

El sindicalismo

Al observar de nuevo el cuadro 1 y la gráfica que lo acompaña se constata que el sector con más regularidad en su acción es el laboral así describa también la trayectoria de descenso en los años del gobierno de Turbay. Sin incluir formas de protesta distintas de la huelga, el mundo sindical aporta el

20 Véanse los análisis de Bernardo Jaramillo y Nelson Berrío en Marta Harnecker, *Entrevista con la nueva izquierda*. Managua: Centro de Documentación y Ediciones Latinas, 1989.

21 Bernardo Jaramillo señala que en 1988 había muchas movilizaciones pero eran "como pompas de jabón ... cada una por su lado; salían al aire pero no había enlace entre ellas" (en Martha Harnecker, *Entrevista...*, pág. 60).

22 "Exicraso" la llamó la revista *Opción* (Nos. 6-7, noviembre-diciembre de 1988, págs. 12-15). Para Julián Vargas fue un paro apacible en donde "la agresividad oficial fue mayor que la sindical" (*Cien Días*, No. 4, pág. 12). Otros balances del evento en *Colombia Hoy*, Nos. 62 y 63, de 1988 y Marta Harnecker, *Entrevista...*, págs. 60-67 y 173-175.

23 En el discurso ante el parlamento el 20 de julio de 1989 Barco dijo que "según estadísticas oficiales... confirmadas por Cinep" la protesta social estaba disminuyendo (*Colombia Hoy*, No. 75, 1989, págs. 4-5). Se refería a un artículo publicado en *Cien Días*, No. 6, junio de 1989, págs. 22-23, en donde Camilo González se preguntaba por las razones del aparente descenso de las luchas sociales desde 1987. Lo que el Presidente no dijo es que el articulista señalaba la represión y la burocratización como los factores cruciales en esta tendencia. Posteriormente se publicó otro artículo que matizaba las cifras acuñadas con apresuramiento por González y se aducían factores como la reforma municipal para el caso cívico (No. 7, septiembre de 1989, págs. 20-21).

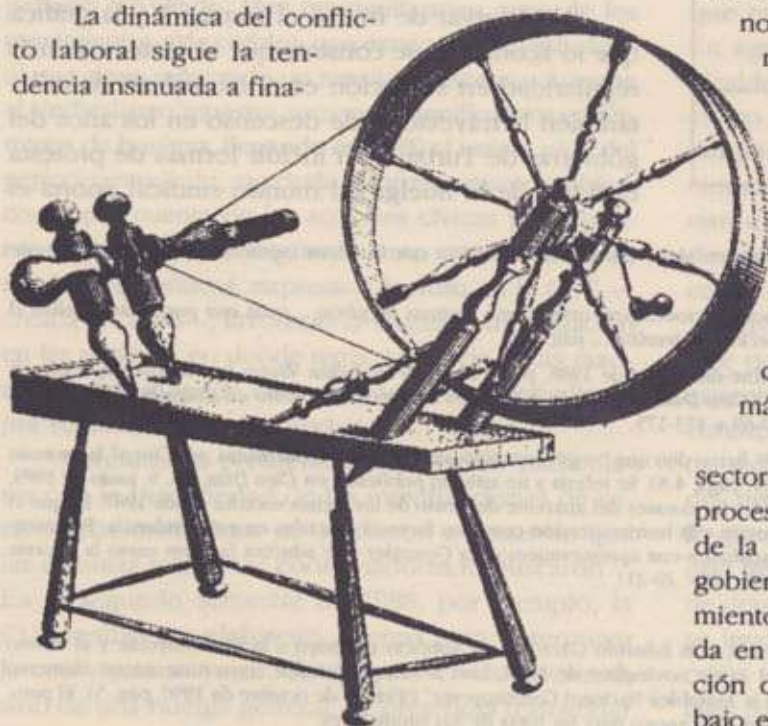
24 28 de agosto de 1988, pág. 3b.

25 Así lo planteaba el dirigente, en ese entonces, de la USO, Luis Eduardo Garzón para justificar el apoyo a la Constituyente y al mismo tiempo la convocatoria de un Paro Cívico Nacional el 14 de noviembre de 1990. Esas acciones "pueden convertirse en un elemento dinamizador hacia ganar (sic) un importante espacio en la Asamblea Nacional Constituyente" (*Voz*, 25 de octubre de 1990, pág. 5). El paro, sin embargo, fue lánguido y no parece haber incidido en gran apoyo para las listas de sus promotores.

mayor número de registros salvo en dos años (1984 y 1987) cuando fue sobrepasado por los campesinos. Esto puede sugerir una cierta primacía de este movimiento en el conjunto de las luchas sociales, lo que no equivale a un supuesto vanguardismo obrero.²⁶ En realidad, como ya se ha señalado, las luchas sociales no están unificadas y, por el contrario, salvo convergencias coyunturales, sus dinámicas marchan aisladas. Así se percibe en la simple comparación entre paros cívicos y huelgas del cuadro 2.

Dentro del mundo laboral, el sector que más aporta conflictos es el estatal, en especial el magisterio y los trabajadores de la salud. A pesar de que no ganan los sueldos más bajos y cuentan con mayor estabilidad en el empleo, constituyen el sector con mayores tasas de sindicalización y en donde, a pesar de estar prohibida la huelga por ser 'servicio público', más se ejerce. Se ratifica así la hipótesis de que una relativa posición privilegiada no es óbice para que un sector social sea militante. No es por azar que los sindicatos de trabajadores estatales hayan sido el bastión del sector no confederado que convergió luego en la CUT.

La dinámica del conflicto laboral sigue la tendencia insinuada a fina-



les del Frente Nacional hacia la mayor desinstitucionalización. No sólo es el punto del ejercicio de la huelga donde está prohibida, sino el desborde de los conflictos motivados por la violación de leyes o convenios, lo que los aleja de los procedimientos legales de concertación.²⁷ La negociación en condiciones 'normales' parece ser cada vez más la excepción y no la regla. El aislamiento y la consiguiente desesperación que notábamos en algunas huelgas de estatales representan la otra cara de la desinstitucionalización del conflicto laboral.

El clima de violencia, en la segunda mitad de los ochenta, parecía acelerar la tendencia al aumento de la protesta 'política' —la que se da contra decisiones del Estado o su inoperancia—, mas no así de la huelga de solidaridad. La dirigencia sindical participó no sólo en debates estrictamente laborales, sino en aquellos donde se ventilaban violaciones de derechos humanos, modelos económicos y procesos de paz. Estos hechos sumados a la participación obrera en listas para la Asamblea Constituyente parecen sugerir una creciente politización del mundo laboral. Si bien es cierto que esta tendencia no abarca el grueso del sindicalismo, especialmente el de base, que mantiene una fuerte conexión con las demandas económicas inmediatas, hay indicios de transformación en la dirigencia y en grandes sindicatos nacionales, en especial de trabajadores estatales. En los años ochenta la agenda del mundo sindical dejó de ser por entero economicista, como se la pudo caracterizar en periodos anteriores. Sin que se desligue del todo de las necesidades materiales se abre cada vez más al debate político y a demandas simbólicas.

En el proceso de más presencia pública del sector sindical influyó mucho la consolidación de procesos unitarios, especialmente la conformación de la CUT. La experiencia del unidad a fines del gobierno de López, impensable antes, y el acercamiento de la mayor parte de las fuerzas de izquierda en los años posteriores, permitieron la agrupación de distintas tendencias sindicales y políticas bajo el liderazgo del exministro de Trabajo y anti-

CUADRO 3
LUCHAS AGRARIAS
1980-1990

AÑO	Movilizaciones	Paros agrarios	Tomas	Invasiones*	Total
1980	7		1	21	29
1981	8		2	25	35
1982	6		3	16	25
1983	13		9	50	72
1984	14		15	153	182
1985	24		17	60	101
1986	17	1	13	123	154
1987	43	2	17	192	254
1988	22	3	8	54	87
1989	5		13	19	37
1990	16	2	15	17	50
Total	175	8	113	730	1026

FUENTE: Banco de datos construido por Esmeralda Prada y Carlos Salgado

* La información de invasiones proviene del Incora y del Archivo de Prensa de Cinep

guo dirigente de la UTC, Jorge Carrillo, en 1986. Algo similar ocurrió con el polo que dará origen en los noventa a la CGTD. Aunque la unidad orgánica llegó en un momento de debilidad del sindicalismo, mirado en términos de la baja en la tasa de afiliación —de un 15% en los años setenta a

casi 7% en los noventa—²⁸, no es despreciable porque posibilita alguna coordinación en los conflictos y sobre todo potencializa la presencia pública del mundo del trabajo en escenarios regionales y nacionales.

Las luchas agrarias

La información contenida en el Cuadro 3 que cubre sólo los años 1980 a 1990, fue recopilada por Esmeralda Prada y Carlos Salgado.²⁹ Para los años anteriores nuestras fuentes arrojan una subvaluación de los conflictos por lo que por ahora prescindimos de ellos.³⁰ No obstante distintos indicadores sugieren que luego del repunte parcial del 74, las luchas campesinas disminuyeron hasta bien entrados los años ochenta.³¹

Si se mira la evolución de las luchas campesinas desde finales de los cincuenta hasta los noventas se destacan tres grandes ciclos de auge: 1959-61, de menor escala que los otros, 1970-75 y 1984-87. Todos tienen que ver con momentos de gran debate político sobre el campo. Los dos primeros giran en torno a la reforma agraria: su expedición, el primero, y la presión para que se hiciera realidad, el segundo. El tercero no está relacionado tanto con el reformismo agrario cuanto con descentralización y la construcción de poder local que tienen implicaciones para el campo. Sin embargo, como lo muestra la literatura

26 Pero tal vez sí matiza la apreciación de muchos estudiosos sobre el supuesto desplazamiento del protagonismo de los movimientos tradicionales (campesino y sindical) hacia el cívico. Las cifras de luchas no ratifican para los años estudiados esta mirada que más bien refleja las ilusiones o desencantos de los intelectuales cuando no un afán de enterrar a los 'viejos' actores desconociendo sus dinámicas concretas. Al respecto véase mi ensayo "Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia, siglo XX" en Bernardo Tovar (compilador), *La historia al final del milenio*, Vol. I. Bogotá: Editorial Universidad Nacional, 1994.

27 Según Alvaro Delgado, "el 70% de los ceses de labores en los años ochenta estuvo fuera de la ley" (*¿Dónde está la clase obrera?* Documentos Ocasionales No. 72. Bogotá: Cinep, 1995, pág. 67).

28 *Portafolio*, 14 de febrero de 1994, pág. 11. Estos porcentajes hay que matizarlos pues, de una parte, se hacen sobre el total de la PEA y no del empleo formal, y de otra, el número de sindicatos parece aumentar mas no así la afiliación a ellos.

29 "La protesta campesina, 1980-1995" manuscrito, 1999.

30 Hablaban de 11 luchas en 1975, 5 en 1976, 2 en 1977, 3 en 1978 y 2 en 1979, en su mayoría eran invasiones. A todas luces estas cifras no son comparables a las construidas por Prada y Salgado.

31 Según León Zamosc, en 1975 se produjeron 70 invasiones, 16 en 1976, 20 en 1977 y 6 en 1978 ("Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia: un balance retrospectivo, 1950-1990", *Análisis Político*, No. 15, enero-abril, 1992, pág. 52). En un recuento de 'eventos agrarios' que incluye actos tan disímiles como asambleas y éxodos, el autor describe una tendencia similar a la de nuestro cuadro 3. Los años 78 y 79 muestran los registros más bajos —15 y 16 respectivamente, sobre una media cercana a 90— (pág. 56). Todo ello apunta a recavar sobre la idea de que el segundo lustro de los años setenta fue bajo en protestas campesinas.

sobre el tema, las acciones campesinas no se explican solamente por los reacomodos del sistema político. De una forma u otra, los autores que trabajan recientemente el tema postulan un papel más activo de los campesinos bien sea por medio de tácticas propias o bien por influencia de las orientaciones de izquierda.³²

En cualquier caso la variable organizativa es importante a la hora de la movilización. Si en el primer auge no hubo una clara expresión organizativa, el segundo sí tuvo nombre y apellido: la ANUC impulsada por Lleras Restrepo. No obstante, la organización vivió una rápida autonomización con relación al Estado, no así con la izquierda. En el tercer auge el aspecto organizativo gremial no es evidente. La ANUC, después de múltiples divisiones, había reconstituido dos polos: uno oficial en 1980 al reunificarse los ejecutivos de las líneas Armenia y Sincelejo; y otro crítico en 1987 fruto de la reagrupación de los sectores de izquierda que se fueron desprendiendo



CUADRO 4
ACCIONES CIVICAS

AÑO	Movilizaciones	Tomas	Paros Cívicos	Invasiones	Protestas	TOTAL
1975	13	8	9	3	10	43
1976	5	4	11	0	4	24
1977	7	2	15	2	1	27
1978	10	0	26	3	3	42
1979	8	5	11	7	5	36
1980	5	4	9	4	6	28
TOTAL	48	23	81	19	29	200

FUENTE: *El Tiempo* y diversos órganos de prensa procesados por el autor

CUADRO 5
ACCIONES CIVICAS
1981-1990

AÑO	Movilizaciones	Tomas	Paros Cívicos	Invasiones*	Protestas*	TOTAL
1981	8	6	14	8	3	39
1982	13	5	25	4	1	48
1983	27	3	24	1	6	61
1984	30	4	21	2	1	58
1985	34	8	18	1	3	64
1986	50	13	38	0	1	102
1987	70	12	53	0	1	136
1988	76	14	35	1	1	127
1989	21	15	29	1	1	67
1990	31	18	27	1	3	80
Totales	360	98	284	19	21	782

FUENTES: Todo 1981 y hasta agosto de 1982 *El Tiempo* procesado por el autor. El resto está tomado de las bases de datos construidas por Javier Giraldo (1982-1986) y Martha C. García (1986 - 1990)

Las columnas invasiones y protestas violentas son construidas por el autor sobre la información de *El Tiempo* (1981-agosto de 1982) y del Archivo de Prensa de Cinep para todos los años.

de la 'línea Sincelejo'.³³ Pero su protagonismo nunca llegó a los niveles de comienzos de los años setenta. En realidad, en el auge de luchas agrarias de 1984-1987 figuraron muchas organizaciones: algunas cercanas a los movimientos cívicos regionales, otras a organizaciones de izquierda, otras puramente locales y, en fin, algunas bajo el rótulo de alguno de los polos de la ANUC. Pero sin duda las que más peso tuvieron en las grandes acciones fueron las segundas. Ya veíamos que la izquierda armada y sus frentes políticos llegaron en esos años a un gran acercamiento que se tradujo en proyectos unitarios tanto en el mundo sindical, como en el agrario, para no hablar del estrictamente guerrillero.

En estas condiciones la pregunta que surge no es tanto sobre las causas del aumento de luchas campesinas, sino por su súbito declive después del 88. Algunos factores los señalábamos páginas antes—represión y 'guerra sucia', burocratismo y anquilosamiento de las organizaciones e impacto de la reforma política—pero no encontramos, por ahora, respuesta contundente.

En términos de demandas también hay algunos cambios significativos que se insinúan en estos años. Si a principios de los setenta las luchas agrarias giraban en torno a la tierra, en los ochenta aparecieron otros motivos de movilización como los

servicios públicos, las políticas agrarias y los derechos humanos.³⁴ Los campesinos no sólo se acercan en sus demandas a los sectores cívicos y aún sindicales, sino que reiteran su papel cada vez más activo y, por qué no decirlo, más político.

Hasta aquí hemos hablado de los campesinos como los actores cruciales de las luchas agrarias. Pero al lado de ese campesinado, heterogéneo en términos socio-económicos y regionales, también hay grupos étnicos que viven de la tierra pero además reclaman identidades culturales diferentes. Si bien nuestras estadísticas sobre luchas sociales esconden la especificidad étnica que está por detrás de muchas de ellas, y por ello subvalúan el aporte de estos grupos, las expresiones organizativas de las minorías y sus logros materiales y políticos arrojan una apreciación diferente. Esto es particularmente válido para las comunidades indígenas.

La trayectoria recorrida desde el establecimiento del CRIC en 1971 es sorprendente, aunque dista de ser lineal y absolutamente exitosa como a veces se quiere presentar.³⁵ Luego de la convivencia inicial bajo el techo de la ANUC, el CRIC se aleja hasta separarse formalmente de la organización campesina en 1976.³⁶ Para ese momento se habían creado organizaciones regionales en Vaupés, Sierra Nevada de Santa Marta, Tolima y Chocó. En los siguientes años au-

32 De un lado, León Zamosc plantea que en forma muy autónoma el campesinado adelanta tácticas distintas según el contexto político: en los sesenta y setenta estarían más centradas en la lucha por la tierra, mientras en los ochenta girarían en torno a la economía campesina y a la presión por inclusión ciudadana ("Transformaciones agrarias...", págs. 35-66). De otro, tanto Leopoldo Múnera (*Rupturas y continuidades*, págs. 239-308) como Esmeralda Prada y Carlos Salgado ("La protesta campesina...") insisten en que en la acción campesina hay una convergencia entre actores sociales y la izquierda para enfrentar el tradicional descuido del campo o las políticas coyunturales. Las opiniones de dirigentes de izquierda parecerían corroborar esta última lectura para lo ocurrido en la segunda mitad de los ochenta. Nelson Berrio, de A Luchar, dice que las marchas y paros agrarios del 87 y 88 buscaban dar "las bases de una nueva sociedad antes de la conquista del poder central nacional... para eso es preciso crear formas orgánicas autónomas de las masas" (Marta Harnecker, *Entrevista...*, pág. 114).

33 En la trayectoria de la ANUC aparecen muchas divisiones, aparte de la propiciada por el gobierno en 1972. Ellas escondían diferencias de concepción política así aparecieran como asunto gremial. Lo curioso es que casi todos los cuadros políticos compartían una postura maoísta, luego del rechazo de la influencia comunista y trotskista. Para 1987 los principales sectores críticos se reagruparon bajo el rótulo de la ANUC (véase el Archivo de Luchas Campesinas de Cinep, folíderos AD y AS, y *Colombia Hoy*, No. 51, págs. 5-15 y 52, págs. 3-4). A principios de 1988 surgió otro polo como federación de la CUT, Fensuagro, fruto de la unión de sectores que venían de la CSTC y de la ANUC (*Colombia Hoy*, No. 54, pág. 6 y Leopoldo Múnera, *Rupturas...*, pág. 467).

34 En esta sección nos basamos en Esmeralda Prada y Carlos Salgado, "La protesta...", especialmente la tercera parte.

35 Para este análisis nos apoyamos en CRIC, "Diez años de lucha" (*Controversia*, Nos. 91-92, Bogotá: Cinep, 1981) y en varios números de *Unidad Indígena* especialmente el No. 90 de mayo de 1989, que hace un recuento de las organizaciones que componen la ONIC. Por supuesto somos conscientes de que la historia indígena no comienza en 1971, pero sí la de sus actuales expresiones organizativas.

36 La razón aducida para la ruptura fue que se conformó "una organización política a partir de la organización campesina" (*ibid.* pág. 4).

mentaron las organizaciones indígenas locales y regionales, y en 1982 conformaron la Organización Nacional Indígena (ONIC). En el 86 celebraron su segundo congreso en medio de tensiones internas pues es evidente que también aquí había diferencias regionales, culturales y políticas. En junio de 1990 realizaron el tercero con una representación de 85 grupos étnicos y 34 consejos regionales.³⁷ En ese momento los indígenas decidieron dar el paso audaz de participar en la Asamblea Constituyente como una minoría étnica que quería hacer oír su voz. A pesar de su inexperiencia en asuntos electorales, lograron tener presencia significativa en dicho cuerpo consolidando una visibilidad creciente.

Los sectores cívicos

La información sobre las luchas de los sectores cívicos se recoge en los Cuadros 4 y 5. La diferencia entre uno y otro yace en las distintas fuentes y metodologías utilizadas para su construcción por lo que preferimos dejarlos por separado.³⁸ El ritmo pausado de las protestas cívicas que muestra el Cuadro 4 continúa en el siguiente cuadro hasta 1982, año cuando se inicia un aumento vertiginoso que culminará con el pico de 1985 a 1987. Viene luego una disminución aunque las cifras siguen siendo altas para la media del período (cerca a 61). El constante aumento en estas acciones que veíamos para el Frente Nacional se mantiene como tendencia gruesa pero resulta interesante preguntarse tanto por el notorio incremento a mediados de los ochenta y como por su relativo descenso a finales del decenio.

Una primera respuesta brota de la simple constatación empírica del aumento de luchas cívicas, especialmente paros, a partir de la posesión de Belisario Betancur. La combinación de cierta apertura democrática en el marco de la negociación del conflicto armado con seculares problemas urbanos y regionales parece ser la explicación más manida en la opinión pública. El mismo Presidente en un discurso televisado a los pocos meses de asumir el poder dijo una frase que sus contendores siempre le enrostrarán: "No creo que los paros cívicos surjan

arbitrariamente, por obra exclusiva de agitadores extraños y oportunistas. En la mayoría de los casos se deben al desespero de la gente por la carencia de servicios, por sus deficiencias o por las alzas que no se consultan antes con la comunidad".³⁹

Años después, en medio del alud de paros regionales de principios de 1987, se le atribuiría una expresión similar al presidente Virgilio Barco. Un editorial de *La República* exclamó: "Disentimos respetuosamente de la afirmación del señor Presidente de la República quien considera que es buena la protesta de las gentes (aunque) no negamos que algunos de tales actos tengan razón, se animen en la justicia".⁴⁰ La gran prensa del momento tendió a reconocer la justeza de las demandas, no así de los medios utilizados. Ante paro cívico de Boyacá en marzo del mismo año, el articulista Luis G. Nieto Roa, clamaba: "... no dudo de que la historia reciente se repetirá. Es justa y oportuna la rebelión de Boyacá, pero otra vez, como tantas otras antes, se perderá en la indiferencia y el olvido".⁴¹ Un editorial de *El Mundo* usó expresiones similares ante el paro en el Chocó dos meses después: "¿Quién se iba a imaginar que el pueblo chocoano se podía levantar en protesta por el impresionante y tradicional abandono al que lo ha sometido el gobierno central? ... Los habitantes del Chocó tienen toda la razón. Colombia entera los ha abandonado a su negra suerte".⁴²

Palabras más, palabras menos, lo mismo denunciaban las organizaciones sociales. Interrogado el dirigente de la CUT, Hernando Rodríguez, dijo: "Apoyamos todos los paros cívicos porque tienen un fondo de justicia social y son expresiones sensibles de los pueblos que han tenido un abandono secular por parte de los gobiernos de turno y de los partidos políticos".⁴³ En términos más sofisticados los analistas hablaron de problemas estructurales relacionados con el desarrollo desigual y combinado en el caso de las regiones y de crisis urbana en el caso de las ciudades, sobre todo intermedias.⁴⁴

Por la misma línea de análisis, si el descuido secular de las regiones explicaba la protesta, la im-

plementación de la reforma municipal —descentralización y elección de alcaldes populares—, sería la causa del relativo descenso de las acciones cívicas a partir de 1989. El mismo Barco utilizó el argumento para exaltar sus logros, como ya se vio. Sin embargo el descenso en los registros de protestas era relativo, pues seguía siendo alto con relación al promedio de esos años. La reforma no transformó mágicamente el panorama regional. Así lo sugería *El País* en un editorial a propósito del paro de Popayán en junio del 89: "El conjunto de reclamaciones que ha llevado a las gentes de la ciudad de Popayán a plantear un paro cívico, es ciertamente justo ... (hay distancia) entre la gloria nacional que Popayán y el Cauca han dado al país desde comienzos de la República con la (actual) situación de pobreza".⁴⁵

La explicación de la protesta cívica por el descuido secular de regiones y ciudades secundarias, sin embargo, no es aplicable a todas las acciones

contempladas en este período como lo señalábamos para los años del Frente Nacional.

Hubo casos en donde fue la presencia del Estado, por medio de megaproyectos de servicios públicos o por la explotación de recursos energéticos, la que creó nuevas fuentes de riqueza y desarrollo regional motivando movilizaciones por el acceso diferenciado a ellos.⁴⁶ Por tanto, no existe *a-priori* una relación causal entre acción estatal o ausencia de ella y movilización, pues en unas se aduce abandono y en otras excesiva presencia.

Existe otra explicación que ofrece una lectura complementaria de la información encontrada: la gente se movilizaría no tanto porque el Estado descuide o participe en el desarrollo regional y/o urba-



37 *Unidad Indígena*, No. 97, noviembre de 1990, pág. 16.

38 Como advertía en la introducción, he tratado de usar los datos más consolidados de los bancos de luchas sociales de Cinep para los años ochenta. La obvia ventaja de contar con una cobertura mayor de periódicos y una metodología probada tiene también sus limitaciones. Por una parte la serie como tal la inició Javier Giraldo cubriendo periodos presidenciales, desde agosto de 1982 y la continuó Martha Cecilia García a partir de agosto de 1986. Hubo que llenar el espacio revisando directamente el Archivo de Prensa de Cinep para todo 1981 y los siete primeros meses del 82. De otra parte no siempre coincidimos en las categorías usadas aunque me confieso deudor de sus estudios. Por lo común ellos excluyen lo que yo llamo 'protestas violentas'—asonadas o 'pedreas'— y sobre todo las invasiones. Pero en general las cifras son comparables y con ajustes los cuadros podrían unificarse, advirtiendo las diferencias en su proceso de construcción.

39 *El Espectador*, 26 de octubre de 1982, pág. 7a. Años después todavía la gran prensa le cobraría a Belisario esta intervención. Un editorial de *El Tiempo*, ante el paro cívico de Boyacá en marzo del 87, denunciaba: "Lo que ayer vivió Boyacá es también producto del infortunado ejemplo de la administración pasada cuando el presidente Betancur manifestó públicamente su apoyo a ese sistema de protesta" (11 de marzo de 1987, pág. 4a). Por demás no sobra señalar que uno de los lugares comunes de cada gobierno es responsabilizar al anterior, especialmente si es del otro partido, de todo lo malo que le ocurre.

40 25 de marzo de 1987, pág. 4a. Es una nueva muestra de la retaliación que cada partido hace del otro o de la aplicación de la sentencia evangélica de ver la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio.

41 *El Siglo*, 13 de marzo de 1987, pág. 4. El mismo periódico sacó un editorial en donde culpa de éste y otros paros cívicos a la Constitución del 86 por su centralismo exagerado: "por esta razón, los paros cívicos deben ser justificados plenamente con antelación a su declaratoria" (14 de marzo de 1987, pág. 5). Llama la atención la coincidencia de lenguaje con la narración que Voz hace del mismo evento, aunque con implicaciones políticas distintas: "Barricadas, mítines y permanente agitación cívica... recordaron al gobierno central que ya es hora de volver sus ojos a esta próspera pero olvidada región" (19 de marzo de 1987, pág. 7).

42 Desde el título, el editorialista intenta jugar con el estereotipo de lo negro para producir una reacción positiva pero termina reforzándolo (31 de mayo de 1987, pág. 2).

43 *Vanguardia Liberal*, 10 de junio de 1987, pág. 8.

44 Un defensor de esta lectura ha sido Pedro Santana, *Los movimientos sociales en Colombia*. Bogotá: Foro, 1989.

45 27 de junio de 1989, pág. 4a. De hecho la descentralización toma fuerza con la nueva Constitución y en casos como Bogotá esperará hasta 1992 (Martha C. García y Vicente Zamudio, *Descentralización en Bogotá bajo la lupa (1992-1996)*. Bogotá: Cinep, 1997 y Alfonso Torres, "Organizaciones y luchas urbanas en América Latina: un balance de su trayectoria", En controversia No. 175, diciembre, 1999, págs. 14-15).

46 Tal fue el caso del oriente antioqueño en los años ochenta según Clara I. García, "Movimientos cívicos y regiones" Investigación auspiciada por INER, 1992.

no, sino porque propone un discurso distinto ante las luchas sociales. El sólo otorgarle legitimidad a protestas al margen de la institucionalidad, como hizo Betancur, obraría como un factor dinámico no sólo de la movilización social sino de la reconfiguración de la política. En ese sentido irían los editoriales de Alvaro Gómez citados al principio de este ensayo.⁴⁷ Más que la misma ausencia material del Estado o su eventual presencia, lo que movilizó a la gente a partir de 1982 fue el discurso reformista acompañado de una disminución de los mecanismos represivos.⁴⁸ El descenso después del 88 sería explicado de igual forma no tanto por los efectos materiales de una reforma que no se puede ver en lo inmediato sino por su papel simbólico, sumado a otros factores como el recrudecimiento de la guerra sucia y del control a la movilización.

La consideración sobre las demandas tiende a ratificar este análisis. Si bien el problema de servicios públicos domiciliarios sigue siendo el más acuciante, aunque ya no tanto energía sino agua potable, seguido de servicios sociales (salud y educación) e infraestructura, temas como las denuncias por represión, por mal manejo de funcionarios locales o regionales, contra los planes gubernamentales y sobre todo contra la violación de derechos humanos adquieren cada vez más importancia en la agenda de los movimientos cívicos. En el período de Barco, por ejemplo, el punto de los derechos humanos ocupó el segundo lugar en las peticiones con el 19% de las luchas, el de gestión administrativa el quinto con 6,5% y el de políticas gubernamentales el sexto con un 4%.⁴⁹

Rubro aparte son las acciones por la paz que tienden a aumentar durante el gobierno de Barco. Si para mediados de los años ochenta escasamente se contabilizaban unas veinte por año, a partir de 1987 aumentan para llegar en 1990 a unas 70.⁵⁰ Factores como el recrudecimiento de la 'guerra sucia' y el agotamiento del discurso reformista en Barco vuelven a jugar como explicaciones de este tipo de acciones.

Lo paradójico de esta aparente 'politización' de las luchas cívicas es que no se traduzca en el fortalecimiento de su papel político. El divorcio entre ma-

CUADRO 6
PROTESTAS ESTUDIANTILES
1975-1990

AÑO	Movilización	Protesta	Paro	Toma	TOTAL
1975	7	12	18	5	42
1976	0	15	10	1	26
1977	4	9	13	1	27
1978	6	17	6	2	31
1979	8	8	8	3	27
1980	6	7	9	16	38
1981	11	10	17	15	53
1982	11	5	13	11	40
1983	11	8	7	8	34
1984	6	12	18	6	42
1985	3	4	11	7	25
1986	2	4	7	6	19
1987	8	4	15	11	38
1988	8	6	14	4	32
1989	1	2	15	9	27
1990	6	4	16	7	33
TOTAL	98	127	197	112	534

FUENTE: Información procesada por el autor. Hasta 1980 se apoya en *El Tiempo* y otros órganos de prensa, entre 1981 y 1990 en el Archivo de Prensa de Cinep.

yor presencia pública y ausencia en los procesos electorales continuó. Los movimientos locales y regionales que propiciaron debates públicos sobre sus condiciones, no necesariamente participaron en elecciones. La fuerza movilizadora que demostraron grupos como Comuneros 81 de Santander, Inconformes de Nariño, Sons of the Soil de San Andrés y Providencia, y los del Sarare en Arauca, del suroriente antioqueño, el CIMA del Cauca, a los que se podrían sumar el Frente Amplio del Magdalena y Firmes de Caquetá, no se tradujo en gran potencial electoral cuando se produjo la elección popular de alcaldes. En 1988 la categoría 'otros', que supuestamente recogía a muchos de estos movimientos cívicos, obtuvo el 12% de los votos, mientras las coaliciones —con partidos tradicionales o de izquierda— casi el 9%. Lo más grave es que esta precaria presencia tiende a disminuir pues para 1990 registra el 8% y el 5% respectivamente.⁵¹

Lo anterior no niega importantes logros en algunos municipios como fue el caso de Ipiales, en Nariño.⁵² Pero en unos casos el asesinato de un dirigente, en otros la inexperiencia o el desgaste del manejo público y en otros cierta corrupción hicieron que esa expresión política perdiera atractivo.

Tal vez este escaso protagonismo político nacional de los movimientos cívicos se deba a la dificultad de construir mecanismos de coordinación nacional que les permitieran trascender el ámbito de lo local y regional, como si pareció ocurrir con el mundo sindical. En verdad aquí nunca se contó con una organización de real cubrimiento nacional. Una vez creada en 1983, la Coordinadora de Movimientos Cívicos jugó un papel más bien lánguido hasta culminar con su práctica disolución en vísperas de la Asamblea Constituyente cuando no pudo acordar siquiera una lista propia.

El problema de fondo está en la discontinuidad que hay en los sectores cívicos —pero bastante general en los otros movimientos— entre acción reivindicativa y expresión política. La clave parece estar en la 'conciencia pragmática' de la gente que es distinta de la proyección utópica, según Javier Giraldo.⁵³ La primera es la política cotidiana que tiene momentos de ruptura con el sistema político pero que se cimenta sobre una gran continuidad; la segunda es la política virtuosa que poco atractivo concreto ofrece a la gente. En ese sentido, una nue-

va forma de acción política no sería prioridad de los actores cívicos pues con el clientelismo les basta y sobra. Por su parte, para Leopoldo Múnera ese pragmatismo es expresión de las identidades comunitaristas que impregnan la movilización cívica. Dichas identidades estarían acompañadas de, o explicarían, la desarticulación de los diversos planos y orientaciones en los que ocurre este tipo de acciones: la racionalidad instrumental en el local; la de identidad en el regional; y la de sentido de acción en el caso de lo nacional.⁵⁴ Por ello, desde una misma lógica de acción colectiva, es tan difícil dar el salto de lo local a lo nacional, con lo que cualquier proyección política se limita.

Protestas estudiantiles

La observación del Cuadro 6 arroja varias enseñanzas para nuestros propósitos de leer la acción social colectiva en el período posterior al Frente Nacional.

La primera observación es que, en contraste con otros actores sociales, los estudiantes no muestran una tendencia a aumentar las protestas ni siquiera en números absolutos. La trayectoria que describen, como lo muestra el Gráfico 1, es estacionario cuando no de declive absoluto. Incluso el número de registros de este período es menor al del Frente Nacional —534 contra 577—. El año de

47. Por la misma vena, llama la atención la amonestación que hacía el entonces coronel Manuel Bonnet, comandante militar de Barrancabermeja en las vísperas del paro cívico de abril de 1983: "... es normal que los pueblos reclamen y se movilicen cuando quieren que se les resuelva un problema ... lo que sí está mal es la finalidad de lo que se proponen". Por eso es injusto un paro contra "un gobierno que se ha distinguido por ser el gobierno del diálogo" (*Vanguardia Liberal*, 11 de marzo de 1983, pág. 10).

48. Es lo que teóricos como Charles Tilly y Sidney Tarrow llamarían la estructura de oportunidad política (Véase, por ejemplo, el texto del último, *Power in Movement*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994).

49. Martha C. García, "Las cifras...", pág. 58.

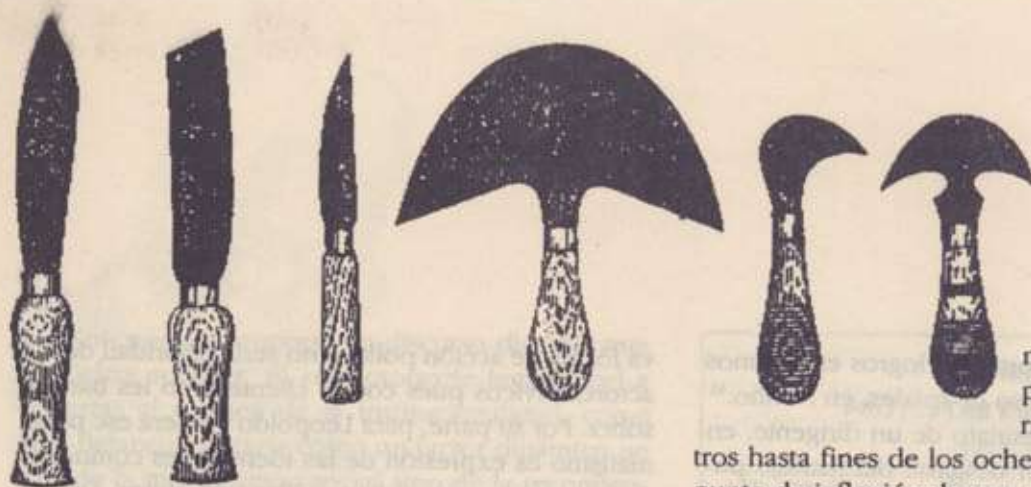
50. Mauricio García, "Paz, ética y democracia en Colombia" en Guillermo Hoyos y Angela Uribe (compiladores), *Convergencia entre ética y política*. Bogotá: Siglo del Hombre, 1998, pág. 199. La medición de estas acciones por la paz es diferente de la de otras luchas registradas acá pues el autor parte de definiciones muy amplias de 'acción' para incluir eventos en recinto cerrado, y de 'actor', en el que cuentan en lugar destacado, los agentes del Estado.

51. Cifras tomadas de Pedro Santana, *Los movimientos...*, pág. 73 y de la Registraduría, *Estadísticas electorales 1990*, Bogotá, 1990, págs. 248-249.

52. Véase de Francisco Reyes, "La convergencia cívica multipartidista" en ACHUR, *La investigación...*, págs. 248-265.

53. "La reivindicación...", págs. 185-237.

54. *Rupturas y continuidades...*, págs. 403-457.



mayor movilización, 1981, está muy por debajo de los picos de 1969 y 1971 (63 y 65 registros respectivamente contra 53).⁵⁵

Lo anterior sugiere cambios en los protagonistas de las luchas sociales en el país en un período largo. Si durante el Frente Nacional los estudiantes, especialmente universitarios, fueron los más claros impugnadores del orden vigente, cosa que revivió temporalmente durante Turbay Ayala, para cuando avanzan los años ochenta son ampliamente desplazados por otros actores sociales.

La segunda sugerencia que brota del Cuadro 6 va en el mismo sentido, pero en este caso la transformación es en las formas de lucha social. Ante todo se nota que hay una tendencia a usar menos las protestas 'violentas' —por lo común pedreas para este sector— y tomas de instalaciones públicas o bloqueos de vías, en aras de favorecer la movilización o incluso el paro. Se podría hablar de una tendencia a recurrir a tácticas de menor confrontación que en el período anterior. El paro o huelga estudiantil es la forma de protesta más común (casi 40% del total). Las tomas, con todo el grado de desesperación que arrastran, proliferaron a mediados del gobierno de Turbay basadas en notorios ejemplos como la masiva presencia de alumnos de la UPTC en la catedral de Tunja a mediados de junio de 1979 a raíz de la misteriosa desaparición de un estudiante.⁵⁶ En términos de marchas estudiantiles la más destacada fue la organizada por los problemas financieros de la UPTC en mayo de 1982. La marcha de más de mil estudiantes, que contó con gran apoyo ciudadano, fue detenida en los límites del Departamento de Cundinamarca donde permaneció casi 10 días, pero finalmente logró por lo menos promesas de apoyo económico.⁵⁷

El año de 1984 termina siendo muy significativo por dos cosas: una visible en el citado cuadro y otra no. De una parte, aunque es uno de los años

más combativos de este período, marca el notorio descenso en los registros

hasta fines de los ochenta. De otra parte, es el punto de inflexión de una característica que se manifestaba desde que hay estadísticas de luchas estudiantiles en el país: hasta ese momento los conflictos estudiantes universitarios se destacaban en los registros de protestas con creces sobre los de secundaria, para no hablar de los casi inexistentes de primaria. A partir de 1984 las cosas se invierten y son más las protestas de los escolares de secundaria. No creemos que este cambio sea resultado del azar.

Al revisar la prensa del momento, y revivir la experiencia personal, surgió la hipótesis de que el prolongado cierre de la Universidad Nacional, por casi un año, luego de los eventos de mayo de 1984, fue una lección ejemplarizante estatal para poner fin al círculo vicioso en el que venían las entidades públicas de protesta-cierre-apertura-protesta. La incapacidad del Estado para dar salidas a la crisis universitaria y de incorporar a las clases medias expresadas en el estudiantado había propiciado desde los años sesenta ese círculo vicioso, en el cual tuvo también mucha responsabilidad la oposición política.⁵⁸ La ausencia de organizaciones gremiales desde la ilegalización de la FUN en 1966, hizo que la identidad del universitario(a) fuese directamente con las organizaciones de izquierda. Con los paros ante la penuria financiera se deterioraba más la calidad de la educación pública en detrimento de la privada, que crecía en proporciones mayores. El largo cierre de la principal universidad del país sería una medida desesperada del Estado que pondría una señal de alerta sobre el destino del sistema de enseñanza pública en el país de continuar el círculo vicioso que llevaba. Las variables que hemos analizado —número de acciones por año, variación en las formas de lucha y peso de los universitarios frente a los de secundaria— parecen sugerir que el golpe sí influyó. No que desaparezca del todo la protesta en la educación superior, pero sí disminuye y sobre todo se transforma.

Esto último lo ilustra la evolución de las demandas estudiantiles. En comparación con el Frente Nacional disminuye la petición explícita por autonomía, entendida de múltiples formas, mientras mantiene una alta participación la exigencia de presupuesto adecuado para la dotación física y académica básica. Le siguen las demandas por directivas cualificadas y democráticas, a las que acompañan peticiones de reforma académica y estabilidad profesoral. Aunque disminuyen los registros de acciones en solidaridad con otros actores, e incluso las tradicionales luchas contra las alzas de transporte, a partir de 1987, como ya es común a todas las luchas sociales, suben los reclamos por respeto de los derechos humanos. Así el estudiantado no haya sido la principal víctima de la 'guerra sucia' suele ser muy sensible a la violación de los derechos humanos.⁵⁵

Lo ocurrido en la Universidad de Antioquia en ese año ilustra con dramatismo el grave problema que se cernía también sobre las instituciones educativas. A principios de agosto se dio una marcha de estudiantes de veterinaria en denuncia del asesinato de un compañero de clases. "Ronda el miedo en la U. de Antioquia" tituló la noticia *El Tiempo*.⁶⁰ Días después estudiantes encapuchados se tomaron las oficinas administrativas y se declararon en huelga de hambre contra lo que creían era una oleada de asesinatos contra el alma mater. Héctor Abad Gómez, prominente médico y defensor de derechos

humanos, justificó así la protesta: "estamos cansados de tantas muertes de toda

índole en nuestro medio".⁶¹ Días después lo asesinaron junto con Leonardo Betancur cuando visitaba en la funeraria a otra víctima más de los sicarios. Meses más tarde cayó Jaime Pardo Leal, abogado, profesor de la Universidad Nacional y dirigente de la UP. Y así nos podríamos hacer interminables. Lo sucedido en las universidades públicas, aunque de menor escala que en otros escenarios, fue suficientemente dramático como para alertar a los movimientos estudiantiles sobre los peligros de la protesta radical.

En ese contexto se entiende el impacto que produjo la acción estudiantil a fines de los ochenta para impulsar la Asamblea Constituyente —la séptima papeleta— y tener presencia en ella. Aunque iniciada en las universidades privadas y en círculos cercanos al galanismo, contó con cierto apoyo en las públicas, en especial de los sectores de izquierda desmovilizados. Sin duda no fue un movimiento masivo como el que acompañó a Camilo Torres a mediados de los sesenta o el que paralizó prácticamente todas las universidades en febrero de 1971. Pero mostró signos de repolitización de la vida universitaria, en el sentido de introducir allí los debates



55 Los datos comparativos provienen de nuestro ensayo "Protesta social...", pág. 23

56 Se trataba de Hernando Benítez, antiguo militante de una organización de izquierda, quien apareció más misteriosamente aún en Zipaquirá tiempo después (*Alternativa*, Nos. 212, pág. 31, 213, págs. 20-21 y 236, págs. 10-11).

57 Véase la información de la gran prensa entre el 10 y el 21 de mayo de ese año. El evento tuvo ribetes novelescos como, por ejemplo, el partido de fútbol que jugaron con los policías que los vigilaban, cuando la tensión disminuyó (*El Espectador* 18 de mayo de 1982, pág. 22a). O las formas de organización interna que debieron adoptar: "A partir de las 10 de la noche nadie puede salir de sus carpas y tampoco se permite ingerir bebidas alcohólicas" (*Ibid.*, 13 de mayo de 1982, pág. 13a)

58 Véase Ivon Le Bot, *Educación e ideología en Colombia*. Medellín: La Carreta, 1979, capítulo II. La revista *Alternativa* tocó en varias ocasiones el tema de la crisis de las universidades públicas insistiendo en la responsabilidad del gobierno por la asfixia presupuestal y de la izquierda porque las toma como un botín burocrático: "Es la consecuencia de creer que los intereses de los estudiantes son los mismos que los de las organizaciones políticas" (No. 115, de 1977, pág. 5, ver también No. 114, pág. 13)

59 En 1988, por ejemplo, de 2.545 asesinatos con información sobre sector social contabilizados por Cinep, sólo 76 (el 3%) correspondían a estudiantes; en igual forma, de 212 desaparecidos con información sobre procedencia social, 14 (7%) fueron estudiantes. Para el primer semestre de 1989 la tendencia continuaba con 3 y 6% respectivamente (*Cien Días*, No. 5, marzo de 1989, pág. 15 y No. 7, septiembre de 1989, pág. 15).

60 6 de agosto de 1987, pág. 8a.

61 *El Mundo*, 13 de agosto de 1987, pág. 11.

públicos no sólo nacionales sino sobre su mismo devenir académico. Incluso los puestos estudiantiles en las instancias colegiadas de las universidades públicas, vacíos durante años por una intransigente abstención, comenzaron a ser llenados en esos años.

A nuestro juicio, el giro que tomaron las demandas estudiantiles y los signos de agotamiento de la protesta más radical, sugieren nuevas relaciones con la sociedad y el Estado. Con la primera se va superando el discurso retórico de 'apoyo al pueblo' en abstracto para ser reemplazado por un interés real de conocer y servirle a la sociedad que rodea los muros universitarios. Ante el Estado se cambia del desencuentro y antagonismo que caracterizó al período del Frente Nacional hasta Turbay, a una relación que sin dejar de ser crítica no es tan contestataria, a la denuncia se le une la proposición. En estos cambios algo pudo influir el derrumbe del socialismo real, pero éste se manifestó a fines del período estudiado. Más contó la evolución propia del movimiento estudiantil que cubre aspectos como los ya anotados y otros difíciles de abarcar por nuestras fuentes como la misma transformación en la cultura y en las identidades estudiantiles.

En esto último no estaban lejos de los maestros que lanzaron desde 1982 el 'movimiento pedagógico' como un intento de redefinir la pedagogía y la cultura, reconstruyendo de paso la identidad del maestro.⁶² Esto muestra que la búsqueda de nuevos sentidos de la acción colectiva se hizo presente en el sector educativo y cultural mucho antes de que cayera el Muro de Berlín.

Sectores empresariales y de trabajadores independientes

En el registro de las protestas de sectores empresariales y de trabajadores independientes tropezamos de nuevo con problemas empíricos. Hasta 1980 consignamos las pocas que aparecieron en los órganos de prensa revisados, pues como es sabido los gremios ejercen gran presión sin recurrir a la acción directa. A partir de 1981 registramos pocos eventos porque el Archivo de Prensa de Cinep no tiene

esa categoría en forma explícita, de modo que las cifras aparecen subvaluadas. Es posible que en muchas de las acciones cívicas de esos años los sectores empresariales locales o regionales, en particular transportadores y comerciantes hayan participado con igual intensidad. De hecho hubo un par de paros cívicos que se dieron contra los impuestos al comercio y muchos más por malas vías o ausencia de ellas.

En los años de mejor información, 1975-1980, los sectores empresariales adelantaron 51 protestas lo que indica que se mantiene la dinámica observada en el Frente Nacional, cuando registramos 107 conflictos abiertos. Incluso los 13 consignados para 1975 hacen parte del pico observado en 1973 y 1974 (11 y 16 respectivamente). Los transportadores de buses y camiones siguen siendo el gremio que más acude a la acción directa, seguido de taxistas y vendedores ambulantes. Antes de culminar el mandato de López, sin embargo, hubo roces entre el Estado y los ganaderos, algodóneros, cultivadores de papa y de cereales por falta de incentivos para la exportación o en torno a la fijación de precios internos. Este tipo de presión disminuye en su visibilidad pública con el ascenso de Turbay, experto en negociación milimétrica no sólo con la clase política sino con los gremios. En general continúa teniendo validez la hipótesis de que estos sectores, especialmente los empresarios más ricos y poderosos, son reticentes a la protesta pues cuentan con sobrada capacidad de presión sobre el Estado.

Movimientos de mujeres

Las cifras de protestas visibles, especialmente a partir de 1981, no reflejan la dinámica que las mujeres desarrollaron en estos años. Sin duda ellas hicieron parte de la mayoría de las protestas registradas, sólo que su rostro no apareció claramente en la gran prensa. En algunos casos se vió precisada a consignar su peso cuantitativo como en la huelga de Vanitex de Bogotá en 1976, la toma de la fábrica de plásticos Stralfa de Cali en 1980, la marcha de Villavicencio para exigir servicios públicos en 1983, o el movimiento cívico 'mujeres en acción'

de Barranquilla por los mismos motivos en el 84 y 85, para citar sólo unos ejemplos.⁶³

Ahora bien, es justo reconocer que en términos de demandas explícitas de género no fueron muy abundantes las acciones de mujeres y menos su figuración pública. Hubo, sin embargo, movilizaciones importantes como las de marzo de 1975 contra el Concordato; las de junio y julio del 78 en torno a la propuesta que sobre el aborto se debatió, sin éxito, en el Congreso; o la de noviembre de 1985 contra la violencia. Según estudiosas del tema, el período estudiado fue de florecimiento de organizaciones feministas fruto tanto de rupturas con la militancia, especialmente de izquierda, como de los espacios creados por los problemas económicos que enfrentan las mujeres, en particular las populares.⁶⁴ De esta forma, al lado de organizaciones propiamente feministas, por lo común de mujeres de clase media cercanas al mundo académico, surgieron asociaciones de mujeres populares o, sobre todo, secciones femeninas en las agrupaciones de carácter reivindicativo. Así vemos que en el mundo laboral se convocan continuas reuniones de sindicalistas que desembocan en 1988 en el Primer Encuentro de la Mujer Trabajadora convocado por la CUT. Las Juntas de Acción Comunal ya habían llamado en 1985 al Primer Encuentro de Mujeres afiliadas. Las madres comunitarias presionaron en

esos años la formación de sindicatos propios y en el mundo rural surgieron también formas de agrupación de las mujeres.⁶⁵ También la ONIC tomó creciente interés por estos asuntos y realizó el Primer Encuentro de Mujeres Indígenas en 1990.⁶⁶

Sin duda las acciones colectivas de las mujeres y el consiguiente despliegue organizativo, con o sin explícita identidad de género, observados en estos años jugaron un papel en la implementación de disposiciones legales en su favor en particular los derechos para las mujeres, la pluralidad de parejas y el ejercicio de la sexualidad consagrados por la Asamblea Constituyente. Es una presencia social y política sin mucha visibilidad, aunque ésta es algo construido por los medios másivos de comunicación más que un atributo inherente a un movimiento social.



EXPRESIONES REGIONALES

Al mirar las manifestaciones regionales de los diversos actores sociales surgen coincidencias significativas. Para las huelgas laborales entre 1975 y 1990, Antioquia es el primero, seguido de Cundinamarca, que incluye a Bogotá, Santander y Valle. Atlántico, otrora un departamento con un poderoso movimiento obrero, es el último de los grandes con

62 Los efectos de este movimiento en la Fecode y en las políticas concertadas como la Ley General de Educación de principios de los noventa en Marco Raúl Mejía, "Movimiento pedagógico, una búsqueda plural de los educadores colombianos", Cinep, *Documento Ocasional*, No. 42, 1989 y Jaime Blandón, "El movimiento pedagógico, anotaciones para un balance", *Educación y Cultura*, No. 29, marzo de 1993, págs. 52-57.

63 Más atención recibió la formación de sindicatos de domésticas o de coperas y meseras, pero no tanto por el problema laboral que reflejaban sino por lo exótico que podrían parecer a los periodistas estos eventos (Véase, por ejemplo, *El Espectador*, 4 de agosto de 1975, pág. última A; *ibid.*, 9 de octubre de 1975, 6b; y *El Tiempo* 10 de octubre de 1980, última A).

64 Norma Villarreal "Movimiento de mujeres y participación política en Colombia, 1930-1991" en Lola Luna y Norma Villarreal, *Historia, género y política*. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1994, págs. 171-181.

65 *Ibid.*, págs. 181-186. No es extraño que la presencia de la mujer sea significativa en esas organizaciones e incluso con tendencia al incremento proporcional como en el caso reciente de los sindicatos. Según Rocío Londoño, a comienzos de los 90, las mujeres eran 42% de los afiliados de la Acción Comunal y el 34% del sindicalismo ("Una visión de las organizaciones populares", Cartilla de Viva la Ciudadanía, 1994, pág. 14).

66 *Unidad Indígena*, No. 91 de junio 1989, pág. 13 y No. 95 de mayo de 1990, pág. 12. Claro que la preocupación de la ONIC es más por la identidad étnica que por la de género. En una entrevista que ofrecen las integrantes del Comité preparatorio del evento señalan que hay "falta de conciencia pues vemos a muchas mujeres que se avergüenzan de ser indígenas y cuando van a trabajar a las ciudades abandonan su cultura y cogen las costumbres del blanco" (*Ibid.* No. 92 de octubre de 1989, pág. 12).

una cifra muy baja de huelgas (87 contra 306 de Antioquia).⁶⁷

Las acciones campesinas sin invasiones entre 1980 y 1995, muestran a Santander como el departamento más conflictivo seguido de Antioquia, Bolívar y Cauca. En cuanto a invasiones entre 1975 y 1995, Sucre es el primero seguido de Antioquia, Magdalena y Santander.⁶⁸

Las luchas cívicas señalan algunas variaciones en el protagonismo regional con relación a períodos previos. Aunque siempre está en primer lugar Cundinamarca, que incluye a Bogotá, se rota el puesto de Antioquia, Santander y Atlántico. A veces aparece en quinto lugar Nariño (entre 1982 y 1986) o Boyacá (1986-1990). Llama la atención el creciente protagonismo de Santander y que Valle no figure entre los departamentos de más conflictividad cívica.⁶⁹ En cuanto a las acciones por la paz se destacan, de nuevo Antioquia y Santander, seguidos de los departamentos de la Costa.⁷⁰

Por último, los estudiantes, el otro actor de gran visibilidad entre 1975 y 1990, muestran este comportamiento regional: en primer lugar Cundinamarca con 102 conflictos, seguido de Antioquia (74), Santander (56), Valle (50) y Atlántico (46). Cabe destacar que el peso de Santander tiende a aumentar en el decenio de los ochenta mientras que el del Valle disminuye en esos años.⁷¹

El abigarrado recuento que hemos hecho sugiere que las dinámicas regionales de los distintos actores parecen apuntar a una lógica similar. En un ensayo anterior distinguíamos para el Frente Nacional entre conflictos motivados por los efectos negativos del desarrollo desigual —los cívicos y rurales— y otros explicados precisamente por lo contrario, por la presencia de polos de desarrollo —sindical y urbano—. ⁷² Para el nuevo período estudiado, el mayor peso de Cundinamarca, Santander, Antioquia en casi todos los sectores sociales, y del Valle o Atlántico en muchos de ellos, muestra que tiende a imponerse la lógica de entre mayor desarrollo económico más conflictividad. Esto es cierto incluso para los conflictos agrarios, con excepción de las invasiones.⁷³ Otro tanto veíamos para

el caso de las luchas cívicas en donde la explicación del desarrollo desigual entre regiones es sólo parcial. Se ratificaría así la idea de que el conflicto social surge más que por pobreza absoluta o gran subdesarrollo, por la aparición o consolidación de fuentes de riqueza y sobre todo por el acceso diferenciado a ellas.

Pero también la variable de violencia, asociada sin duda a las nuevas fuentes de riqueza, influye en el protagonismo de zonas que la sufren con más rigor. De ahí la destacada figuración en términos de acciones sociales de departamentos como Antioquia, Santander y algunos de la Costa. El gran peso de Bogotá entre las ciudades se debe no tanto a la violencia como tal, de la que no está exenta, sino a que por ser la capital nacional hace eco de lo que ocurre en el país y se constituye en el espacio privilegiado para las acciones de denuncia de violación de derechos humanos o de búsqueda de la paz. Más allá de los comportamientos regionales observados, es indudable que estas demandas ocupan un papel cada vez más destacado en las agendas de los movimientos sociales contemporáneos en el país.



CONCLUSIONES

En forma provisional, por el estado actual de la investigación, podemos extraer algunas conclusiones sobre la acción social colectiva entre 1975 y 1990.

Ante todo volvemos a ratificar la impresión que extraíamos de períodos anteriores sobre la gran heterogeneidad de los movimientos sociales tanto dentro de cada uno como entre ellos. No hay evidencias empíricas para hablar de un campo popular que unifique las diversas luchas sociales. Cada uno marcha con una dinámica propia como 'pompas de jabón' que flotan aisladas según la expresión metafórica de uno de los protagonistas de las jornadas de finales de los ochenta.⁷⁴ Cuando más hacen convergencias coyunturales y se dotan, con desigual

éxito, de mecanismos coordinadores. En algunos casos estos últimos influyen en una mayor presencia pública, como sucedió con los sindicalistas y los indígenas, pero no revierte la tendencia aislada que cada uno arrastra.

Dicho lo anterior no deja de llamar la atención la existencia más o menos común de dos ciclos en los años estudiados: uno de disminución en la visibilidad de la acción social colectiva a fines de los setenta y principios de los ochenta; y otro de aumento hacia fines del último decenio analizado. A lo largo de estas páginas nos hemos preguntado por la explicación de este fenómeno y hemos esbozado algunas hipótesis que resumiremos a continuación. Con la excepción de algunas luchas específicas como las invasiones de tierras urbanas o rurales, la dinámica de la protesta en el país entre 1975 y 1990 no estaría motivada por condiciones materiales 'objetivas' como la pobreza o la ausencia de recursos económicos, sino por la percepción 'subjetiva' de que esos recursos están inequitativamente distribuidos. El caso colombiano contemporáneo ratificaría la lectura que muchos historiadores y científicos sociales hacen sobre la agitación social: ella no brota del mero instinto sino que responde a la sensación de que se está cometiendo una injusticia.⁷⁵ La inclusión en las agendas de los movimientos sociales de demandas menos econo-

micistas y más simbólicas como la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado o la preservación de los derechos humanos no es sino otra expresión de esta dinámica.

En términos de protagonismo social, no habría que buscar los sectores más desposeídos en sentido absoluto, sino aquellos que mejor perciben el deterioro de sus condiciones materiales o son más sensibles a demandas simbólicas. Por ello no es de extrañar que en muchos conflictos sean las llamadas capas medias las que lideran la protesta. Esto es claro para los movimientos estudiantil, pedagógico, de mujeres, de trabajadores independientes y aún cívicos. Incluso en el caso laboral señalábamos que la mayor combatividad de los trabajadores estatales mostraba que una relativa posición privilegiada no es óbice para que un sector social sea más militante. Las razones de la rebeldía social hay



67. Cifras suministradas por Alvaro Delgado sobre la base del Banco de Datos que alimenta para el sector laboral en Cinep. En cuanto a las grandes ciudades, Bogotá es la primera (216 registros), seguida de Medellín (154), Bucaramanga (89), Barranquilla (87, todas las huelgas del departamento) y Cali (75).

68. Esmeralda Prada y Carlos Salgado, "La protesta...", 3a parte.

69. Datos contruidos sobre la base de datos elaborada por mí para 1975-1981, Javier Giraldo para 1982-1986 y Martha C. García para 1986-1990.

70. Mauricio García, "Paz, ética..." pág. 199. En cuanto a ciudades se distingue Bogotá y las respectivas capitales de los departamentos señalados.

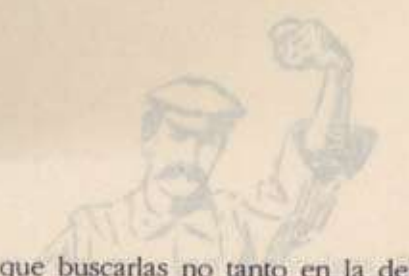
71. Cifras basadas en la información de prensa consultada. En cuanto a ciudades Bogotá está a la cabeza seguida de Medellín, Barranquilla y Cali.

72. "Protesta social..." págs. 29-33.

73. Prada y Salgado afirman que los conflictos rurales, sin invasiones, tienden a concentrarse en las zonas de colonización con explotación de recursos extractivos. Es obvio que las invasiones respondan a otra lógica pues lo que las motiva es la disputa por la tierra que ocurre generalmente en zonas no centrales a la economía nacional.

74. Frase de Bernardo Jaramillo ya citada en la nota 21.

75. Este punto que remite a la discusión teórica sobre el sentido de la acción social colectiva ha sido desarrollado en nuestro ensayo próximo a ser publicado, "La racionalidad de la acción colectiva: ¿Problema moderno o posmoderno?".



que buscarlas no tanto en la privación absoluta sino en la relativa que es la que genera la percepción de injusticia.

Si las dinámicas de la acción social colectiva no responden a una cruda lectura economicista, tampoco pueden quedar en un terreno impreciso como el que a veces se designa como mundo simbólico o cultural. Las percepciones sobre injusticia cuentan pero en contextos económicos, sociales y sobre todo políticos concretos. Aquí es donde encontramos que la variable del comportamiento estatal es clave para entender mucho de lo que ocurre con los actores sociales. No que éstos sean meras marionetas de los partidos políticos o del Estado, sino que las aperturas o cierres del sistema político influyen en la movilización social porque favorecen o entorpecen no tanto la percepción de injusticia cuanto su expresión pública. Como lo insinúa la recurrente literatura sobre el tema, los actores sociales pasarían 'agachados' durante los períodos de alta represión y saldrían de nuevo a las calles y veredas cuando se ofrecieran condiciones políticas para hacerlo.⁷⁶ En ese sentido lo que se ha llamado la 'estructura de oportunidad política' podría explicar gran parte de la acción social colectiva del período estudiado.⁷⁷ Ejemplos hay muchos en estas páginas. Ya lo veíamos en los dos ciclos gruesos de protestas: el reflujo de la agitación social con el endurecimiento iniciado por López y consolidado por Turbay; o en el auge cívico, laboral y campesino a partir de la apertura, al menos discursiva, propiciada por Belisario Betancur.

El peso de la variable política en la acción social colectiva reciente, va de la mano con una cierta politización de los actores sociales. Hay mayor presencia pública en debates locales, regionales y aún nacionales, que no siempre se traduce en participación electoral. Y cuando ésta se da, en especial a partir de la reforma política de Betancur, los resultados no son los esperados. Rubro aparte en este punto lo ocupa la presencia de algunos actores sociales en la Asamblea Constituyente, en especial de los grupos indígenas. Que su participación no fue en vano se refleja en defini-

ciones claves de la sociedad colombiana según la nueva Constitución.

A pesar de estos avances en la repolitización de la sociedad civil expresada en los movimientos estudiados, subsiste un claro hiato entre la acción social y la política —tema crucial para nuestra investigación. Ya veíamos algunas explicaciones para los sectores cívicos que tal vez se pueden generalizar para otros actores sociales —el privilegio de una mentalidad pragmática en la política, o la existencia de distintas racionalidades según los contextos espaciales. Lo que sí se impone para resolver este dilema es una mirada sobre la construcción simultánea de lo social y lo político. Muy sugestivo resulta en este terreno la lectura pos-estructuralista presentada por María Ema Wills: "Así no existe un 'algo' o 'alguien' anterior a la política, ya sean intereses individuales o resistencias populares; tanto los unos como las otras son construcciones históricas mediadas por un lenguaje inscrito en instituciones ... la política se juega entonces no en un terreno ya constituido sino en el terreno de la construcción de identidades".⁷⁸

Para completar el panorama descriptivo sobre la acción social colectiva entre 1975 y 1990 es inevitable la referencia a la irrupción de múltiples violencias que marcan en forma creciente sus dinámicas recientes. No es sólo la violación de derechos humanos y la desaparición física de actores sociales que tanto afectan la vida de las organizaciones populares, sino las perversas dinámicas de instrumentalización de las luchas sociales por parte de partidos y movimientos armados. Así no sólo se ahoga la precaria autonomía de los actores sociales sino que se refuerza el círculo vicioso de mayor represión y penalización de la protesta social.

El desborde de múltiples violencias no sólo socava la acción de las organizaciones sociales sino que pone en entredicho el funcionamiento de la misma democracia. Esta es la explicación que dábamos a la nueva crisis de legitimidad que vivía el país a fines de los años ochenta. De esta forma se cierra una trayectoria que como en círculos concéntricos genera nuevas crisis en aras de superar las anteriores.⁷⁹

Puestas así las cosas, las dinámicas de la acción social colectiva contemporánea en el país deben ser leídas en forma más compleja. No basta dar cuenta de las condiciones estructurales de la economía o la vida social, es necesario acercarse al mundo de las percepciones y de las oportunidades políticas, sin descuidar el contexto de violencia que las constriñe tanto como al mismo sistema político. Tal

vez con esta nueva perspectiva entendamos mejor a los actores sociales y sus comportamientos, con lo que aportaríamos un grano de arena para comprender este extraño modelo para armar que todavía es nuestra democracia.

.....

76 Algunos autores hablan en términos más clásicos de 'doble conciencia' (Michael Hall y Paulo Sergio Pinheiro, "Elements for an Interpretation of the Early Brazilian Labor Movement", mimeo, 1982, pág. 11), otros proponen categorías más cercanas a las nuestras como las de diversas formas de resistencia (E. P. Thompson, *Costumbres en común*. Barcelona: Crítica, 1995) o postulan la existencia de textos ocultos que se oponen veladamente a los oficiales hasta cuando encuentran la posibilidad de volverse públicos (James Scott, *Domination and the Arts of Resistance, Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press, 1990).

77 Véase la nota 48.

78 "Feminismo y democracia, más allá de las viejas fronteras", *Análisis Político*, No. 37, mayo-agosto de 1999, pág. 24.

79 Así lo ve también Marco Palacios: "Pese a una alternancia normal de ocho presidencias, y al funcionamiento regular de todos los poderes constitucionales, el sistema político colombiano se hallaba (en 1990) en una encrucijada similar a la que llevó al pacto bipartidista de 1957" (*Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994*. Bogotá: Ediciones Norma, 1995, pág. 291). Daniel Pecaú, por su parte, también señala la similitud de las crisis, pero a diferencia de la de los años 50 las élites a fines de los 80 no tienen autoridad para encontrarle una salida (*Crónica de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*. Bogotá: Siglo XXI, 1989, pág. 36).